

I. 1916

EL 12 DE OCTUBRE DE 1916, Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia de la Argentina. Fue una jornada excepcional: una multitud ocupó la Plaza del Congreso y las calles adyacentes, vitoreando a quien por primera vez había sido elegido por el voto universal, secreto y obligatorio, según la nueva ley electoral, sancionada en 1912 por iniciativa del presidente Sáenz Peña. Luego de la ceremonia, la muchedumbre desató los caballos de la carroza presidencial y la arrastró en triunfo hasta la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

Su victoria, si no abrumadora, había sido clara, e indicaba una voluntad ciudadana mayoritaria. Visto desde la perspectiva predominante por entonces, la plena vigencia de la Constitución, médula del programa de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido triunfante, se coronaba con un régimen electoral democrático, que colocaba al país a la vanguardia de las experiencias de ese tipo en el mundo. La reforma política pacífica, que llegaba a tan feliz término, se sustentaba en la profunda transformación de la economía y la sociedad. A lo largo de cuatro décadas, y aprovechando una asociación con Gran Bretaña que era vista como mutuamente beneficiosa, el país había crecido de modo espectacular, multiplicando su riqueza. Los inmigrantes, atraídos para esa

transformación, fueron integrados con éxito en una sociedad abierta, que ofreció abundantes oportunidades para todos, y si bien no faltaron las tensiones y los enfrentamientos, éstos fueron finalmente asimilados y el consenso predominó sobre la contestación. La decisión de Yrigoyen de modificar la tradicional actitud represora del Estado, utilizando su poder para mediar entre los distintos actores sociales y equilibrar así la balanza, parecía cerrar la última arista conflictiva. En suma, la asunción de Yrigoyen podía ser considerada, sin violentar demasiado los hechos, como la culminación feliz del largo proceso de modernización emprendido por la sociedad argentina desde mediados del siglo XIX.

Otra imagen era posible, y muchos de los contemporáneos adhirieron a ella y actuaron en consecuencia. Yrigoyen semejava uno de aquellos caudillos bárbaros que se creía definitivamente sepultados en 1880, y tras de él se adivinaba el gobierno de los mediocres. La transición política hacia la democracia no era bien vista, y quienes se sentían desplazados del poder manifestaban escasa lealtad hacia el sistema institucional recientemente diseñado y una añoranza de los tiempos en que gobernaban los mejores. Por otra parte, la Primera Guerra Mundial, que había estallado en 1914, permitía vislumbrar el fin del progreso fácil, crecientes dificultades y un escenario económico mucho más complejo, en el que la relación con Gran Bretaña no bastaría ya para asegurar la prosperidad. Las tensiones sociales y políticas que empezaban a recorrer el mundo en la última fase de la guerra, y que se desencadenarían con su fin, también se anunciaban en la Argentina, y alimentaban una visión dominada por el conflicto. La sociedad estaba enferma, se decía; los responsables eran los cuerpos extraños, y en última instancia la inmigración en su conjunto. Creció así una actitud cada vez más intolerante, que de momento se expresó en un nacionalismo chauvinista.

Ambas imágenes de la realidad, parciales y deformadas, estaban presentes en 1916 y, cada una a su manera, eran producto de la gran transformación producida a lo largo del medio siglo anterior. Por mucho tiempo moldearon actitudes y conductas, modificadas por nuevos datos de la realidad que, incluso, corrigieron o rectificaron la imagen de la etapa de la expansión.

LA CONSTRUCCIÓN

En aquellas décadas previas a 1916, no tan lejanas como para que no se recordara la aceleración de los cambios, la Argentina se embarcó en lo que los contemporáneos llamaban el “progreso”. Los primeros estímulos se percibieron desde mediados del siglo XIX, cuando en el mundo comenzó la integración plena del mercado y la gran expansión del capitalismo, pero sus efectos se vieron limitados por diversas razones. La principal de ellas fue la deficiente organización institucional, de modo que la tarea de consolidar el Estado fue fundamental: hacia 1880, cuando asumió por primera vez la presidencia el general Julio A. Roca, se había cumplido lo más grueso, pero todavía se requirió mucho trabajo para completarla.

Lo primero fue asegurar la paz y el orden, y el efectivo control sobre el territorio. Desde 1810, y a lo largo de siete décadas, las guerras civiles habían sido casi endémicas: los poderes provinciales habían luchado entre sí y contra Buenos Aires, incluso después de 1852. Desde 1862, el flamante Estado nacional, poco a poco -y con escasa fortuna al principio-, fue dominando y subordinando a quienes hasta entonces habían desafiado su poder, y aseguró para el Ejército nacional el monopolio de la fuerza. Algunas cuestiones se dirimieron durante la guerra del Paraguay (1865-1870), y otras inmediatamente después, cuando sucesivamente fueron doblegadas Entre Ríos -gran rival de Buenos Aires en la conformación del

nuevo Estado- y luego la propia provincia porteña -cuya rebelión fue derrotada en 1880-, que debió aceptar la transformación de la ciudad de Buenos Aires en Capital Federal. El Estado afirmó su poder sobre los vastos territorios controlados por los indígenas: en 1879 se aseguró la frontera sur, arrinconando a las tribus en el contrafuerte andino, y hacia 1911 se completó la ocupación de los territorios de la frontera nordeste. Los límites territoriales del Estado se definieron con claridad, y las cuestiones internas se separaron de manera tajante de las exteriores, con las que tradicionalmente se habían mezclado: la guerra del Paraguay contribuyó a definir las fluctuantes fronteras de la Cuenca del Plata, y la Conquista del Desierto, en 1879, aseguró la posesión de la Patagonia, aunque los conflictos con Chile se mantuvieron vivos hasta por lo menos 1902, y reaparecieron más tarde.

Desde 1880 se configuró un nuevo escenario institucional, cuyos rasgos perduraron largamente. Apoyado en los triunfos militares, se consolidó un centro de poder fuerte, cuyas bases jurídicas se hallaban en la Constitución sancionada en 1853 y que, según las palabras de Alberdi, debían cimentar “una monarquía vestida de república”. Como ha mostrado Natalio Botana, se aseguraba allí un fuerte poder presidencial, ejercido sin limitaciones en los vastos territorios nacionales y fortalecido por las facultades de intervenir las provincias y decretar el estado de sitio. Por otra parte, los controles institucionales del Congreso, y sobre todo la exclusión de la posibilidad de la reelección, aseguraban que ese poder no derivara en tiranía. Quienes así lo concibieron tenían presente la larga experiencia de las guerras civiles y la facilidad con que las elites se dividían en luchas facciosas encarnizadas y estériles. En ese sentido, los resultados colmaron las expectativas. Las facultades legales fueron reforzadas por una práctica política en la que, desde el vértice del poder, se controlaban simultáneamente los resortes

institucionales y los políticos. Se trataba de un mecanismo que, en sus versiones extremas y menos prolijas, fue calificado de *unicato*, pero que en rigor se empleó normalmente antes y después de 1916. El Ejecutivo lo usó para disciplinar a los grupos provinciales, pero a la vez reconoció a éstos un amplio margen de decisión en los asuntos locales. El poder, que se había consolidado en torno de los grupos dominantes del próspero Litoral -incluyendo a la muy dinámica Córdoba-, encontró distintas formas de hacer participar de la prosperidad a las elites del Interior, particularmente a las más pobres, y asegurar así su respaldo a un orden político al que, además, ya no podían enfrentar.

Aunque en 1880 estaban delineadas, en sus rasgos básicos, las instituciones del Estado -el sistema fiscal, el judicial, el administrativo-, en muchos casos eran apenas esbozos que debían ser desarrollados. Escaso de instrumentos y medios para la realización de muchas de las tareas más urgentes, como educar o fomentar la inmigración, el Estado se asoció inicialmente con sectores particulares, pero a medida que sus recursos aumentaron, fue expandiendo sus propias instituciones, y llegó a adquirir consistencia y solidez mucho antes que la sociedad. Ésta, en pleno proceso de renovación y reconstitución, careció inicialmente de la organización y de los núcleos capaces de limitar su avance.

Deliberada y sistemáticamente actuó el Estado para facilitar la inserción de la Argentina en la economía mundial y adaptarse a un papel y una función que -se pensaba- le cuadraba a la perfección. Ese lugar implicaba una asociación estrecha con Gran Bretaña, potencia que venía oficiando de metrópoli desde 1810. Limitados al principio a lo comercial, esos vínculos se estrecharon luego de 1850, por la gran expansión de la producción lanar -la primera organizada sobre bases definidamente capitalistas- y la contemporánea profundización de la industrialización de Gran

Bretaña, convertida ya en el *taller del mundo*. Se profundizaron las relaciones comerciales y se anudaron las financieras, especialmente por el sólido aporte británico al costo de la construcción del Estado. Pero la verdadera maduración se produjo luego de 1880, en la era del imperialismo. Por entonces, Gran Bretaña -dueña indiscutida del mundo colonial- empezaba a afrontar la competencia de nuevos rivales -Alemania primero, y luego Estados Unidos-, y el mundo entero fue dividiéndose en áreas imperiales, formales o informales. En el momento en que se consolidó la asociación con Gran Bretaña, la metrópoli entraba en su madurez, ciertamente sólida, pero también poco dinámica. Incapaz de afrontar la competencia industrial, se refugió en su Imperio y sus monopolios, y optó por las ganancias aseguradas por inversiones privilegiadas, de bajo riesgo y alta rentabilidad.

En la Argentina, entre 1880 y 1913, el capital británico creció casi veinte veces. A los rubros tradicionales -comercio, bancos, préstamos al Estado-, se agregaron los préstamos hipotecarios sobre las tierras, las inversiones en empresas públicas de servicios, como tranvías o aguas corrientes, y sobre todo los ferrocarriles. Éstos resultaron extraordinariamente rendidores: en condiciones por cierto privilegiadas, las empresas británicas se aseguraron una ganancia que garantizaba el Estado, que también otorgaba exenciones impositivas y tierras a los costados de las vías por tenderse.

En etapas posteriores se subrayaron persistentemente estos problemas, pero los contemporáneos vieron más bien en la conexión angloargentina sus aspectos positivos: si los británicos obtenían buenas ganancias por sus inversiones o la comercialización de la producción local, dejaban un amplio campo de acción para los empresarios locales, los grandes propietarios rurales, a quienes quedaba reservada la participación mayor en una producción que

fue posibilitada por la infraestructura instalada por los británicos. Los 2.500 km de vías existentes en 1880 se transformaron en 34 mil en 1916, sólo un poco menos de los 40 mil que, en su momento máximo, llegó a tener la red argentina. Algunas grandes líneas troncales sirvieron para integrar el territorio y asegurar la presencia del Estado en sus confines, mientras que otras cubrieron densamente la pampa húmeda, lo que posibilitó -junto con el sistema portuario- la expansión de la agricultura primero y de la ganadería después, cuando los mismos británicos instalaron el sistema de frigoríficos.

Esa expansión requirió abundante mano de obra. El país había venido recibiendo cantidades de inmigrantes en forma creciente a lo largo del siglo, pero a partir de 1880 las cantidades crecieron abruptamente. Desde el lado de Europa la emigración estaba estimulada por un fuerte crecimiento demográfico, la crisis de las economías agrarias tradicionales, la búsqueda de empleos y el abaratamiento de los transportes; desde el país se decidió modificar la política inmigratoria tradicional, cauta y selectiva, y fomentar activamente la inmigración, con propaganda y pasajes subsidiados. Pero ninguno de esos mecanismos hubiera sido efectivo si, simultáneamente, no hubiera crecido la posibilidad de encontrar trabajo. Los inmigrantes demostraron una gran flexibilidad y adaptación a las condiciones del mercado de trabajo: en la década de 1880 se concentraron en las grandes ciudades, en la construcción de sus obras públicas y la remodelación urbana, pero desde mediados de la década siguiente, al abrirse las posibilidades en la agricultura, se volcaron masivamente al campo tanto quienes venían para instalarse en forma definitiva como quienes viajaban cada año para trabajar en las cosechas. Este fenómeno -posibilitado por la baratura de los pasajes y por los salarios locales relativamente altos- explica en parte la fuerte diferencia entre los inmigrantes llegados y

los efectivamente radicados: entre 1880 y 1890 los arribados superaron el millón, y los efectivamente radicados fueron unos 650 mil, cantidad notable para un país cuya población rondaba los dos millones. En la década siguiente, luego de la crisis de 1890, se atenuó la llegada, y los que retornaron fueron, año a año, más que los que llegaban, pero el ritmo se restableció en la primera década del siglo XX, cuando los saldos positivos superaron el millón.

La promoción activa de la inmigración fue sólo un aspecto del conjunto de actividades que el Estado, lejos de la prescindencia del supuesto “modelo liberal”, desarrolló para estimular el crecimiento económico, solucionando los cuellos de botella y creando las condiciones para el desenvolvimiento de los empresarios privados. Particularmente, entre 1880 y 1890 esta acción fue intensa y definida. Las inversiones extranjeras fueron gestionadas y promovidas con amplias garantías, y el Estado asumió el riesgo en las menos atractivas, para luego transferirlas a los privados cuando el éxito estaba asegurado. En materia monetaria se aceptó y estimuló la depreciación, en beneficio de los exportadores, y hasta 1890 al menos, a través de los bancos estatales, se manejó el crédito con gran liberalidad. Sobre todo, el Estado se hizo cargo de lo que se llamó la “Conquista del Desierto”, de la que resultó la incorporación de vastas superficies de tierra apta para la explotación que fueron transferidas en grandes extensiones y con un costo mínimo a particulares poderosos y bien relacionados. Muchos de ellos ya eran propietarios y otros lo fueron desde entonces, pero esta acción estatal resultó decisiva para la consolidación de la clase terrateniente. La tierra luego se compró y vendió ampliamente, aunque su espectacular valorización hasta 1890 -debida al cálculo de futuros beneficios asegurados por la expansión que se iniciaba- redujo el círculo de posibles adquirentes.

Aunque beneficiarios de la generosidad del Estado -que por otra

parte ellos mismos controlaban-, los terratenientes de la pampa húmeda manifestaron una gran capacidad para adecuarse a las condiciones económicas y buscar el máximo posible de ganancias. En el Litoral, donde escaseaba el ganado y la producción podía trasladarse fácilmente por los ríos, se inclinaron por la agricultura; allí donde la tierra era barata, optaron por la colonización, que la valorizaba, pero cuando el valor aumentó prefirieron el sistema de arrendamiento. En la provincia de Buenos Aires perduró la gran propiedad indivisa y la explotación del lanar, hasta que la instalación de los frigoríficos hizo rentable la explotación del vacuno refinado con las razas inglesas y destinado a la exportación. Entonces, las necesidades de praderas artificiales estimularon la colonización agrícola: las tierras se destinaron alternativamente a cereales, forrajes y pastoreo, por lo cual la agricultura se asoció definitivamente con la ganadería.

Esta combinación resultaba la más adecuada para las condiciones específicas de entonces. La calidad de las praderas aseguraba altos rendimientos con escasas inversiones; por otra parte, las condiciones del mercado mundial, extremadamente cambiantes e incontrolables desde este lejano sur, hacían conveniente mantener la flexibilidad para elegir, cada año, la opción más rentable. Parecía más razonable mantener la tierra unida para conservar todas las opciones y encarar explotaciones más bien extensivas. Como ha propuesto Jorge F. Sábato, los empresarios se habituaron a rotar por diversas actividades, buscando en cada caso la *crema* de la ganancia, sin fijarse definitivamente en ninguna y procurando no inmovilizar el capital: a las agropecuarias se agregaron luego las inversiones urbanas -tierra, construcciones- e incluso las industriales. Así, a partir de la tierra, se constituyó una clase empresaria concentrada y no especializada, una oligarquía, que desde la cúspide controlaba un conjunto amplio de actividades.

Esas condiciones estimularon también la conducta especulativa de los chacareros. Los inmigrantes que durante la expansión agrícola se convirtieron en arrendatarios y disponían de un capital limitado prefirieron alquilar por tres años extensiones importantes de tierra antes que adquirir definitivamente una parcela más pequeña: especuladores trashumantes jugaron sus cartas a unos años de trabajo intenso, con mínimas inversiones fijas, quizá premiado con unas buenas cosechas, para volver a repetir la apuesta en otro campo arrendado.

En esa primera etapa, este comportamiento altamente flexible permitió aprovechar al máximo los estímulos externos y posibilitó un crecimiento verdaderamente espectacular. Desde 1890, la expansión de la agricultura fue continua, y el campo se llenó de chacareros y jornaleros. Entre 1892 y 1913, se quintuplicó la producción de trigo, de la cual la mitad se exportaba. En ese lapso, las exportaciones totales se multiplicaron cinco veces, mientras que las importaciones lo hicieron en proporción algo menor. Al trigo se agregaron el maíz y el lino, y entre los tres cubrieron la mitad de las exportaciones; en el resto, junto a la lana, comenzó a ocupar una parte cada vez más importante la carne, sobre todo a partir de 1900, cuando los frigoríficos empezaron a exportar hacia Gran Bretaña carne vacuna congelada o enlatada. Por entonces, el lanar había sido desplazado de Buenos Aires hacia el sur, y lo reemplazaba el vacuno mestizado con las razas británicas Shorthorn y Hereford. En vísperas de la guerra, la Argentina era uno de los principales exportadores mundiales de cereales y carne.

Si las ganancias de los socios extranjeros fueron elevadas -a través de los ferrocarriles y los frigoríficos, del transporte marítimo, de la comercialización o del financiamiento-, también lo fueron las del Estado, provenientes fundamentalmente de impuestos a la importación, y las de los terratenientes, quienes, dadas las ventajas

comparativas con respecto a otros productores del mundo, optaron por destinar una porción importante de éstas al consumo. Ello explica en parte la magnitud de los gastos realizados en las ciudades, que unos y otros se ocuparon en embellecer imitando a las metrópolis europeas, pero cuyo efecto multiplicador fue muy importante. El Estado las dotó de los modernos servicios de higiene o de transporte, así como de avenidas, plazas y un conjunto de edificios públicos ostentosos y no siempre de buen gusto. Los particulares construyeron residencias igualmente espectaculares, palacios o *petits hôtels*. El ingreso rural se difundió en la ciudad multiplicando el empleo y generando a su vez nuevas necesidades de comercios, servicios y finalmente de industrias, pues en conjunto las ciudades, sumadas a los centros urbanos de las zonas agrícolas, constituyeron un mercado atractivo. El sector industrial alcanzó una dimensión significativa y ocupó a mucha gente. Algunos grandes establecimientos, como los frigoríficos, los molinos y algunas fábricas grandes, elaboraban sus productos para la exportación o el mercado interno. Otro grupo de establecimientos importantes, textiles o alimentarios, suministraba productos elaborados con materia prima local, y un extenso universo de talleres, generalmente de propiedad de inmigrantes afortunados, completaba el abastecimiento del mercado interno. Este sector industrial creció asociado con la economía agropecuaria, expandiéndose y contrayéndose a su ritmo, y nutriéndose de capitales extranjeros, aunque a través de los bancos los terratenientes locales o quienes controlaban el comercio exterior pudieron agregar la inversión industrial al conjunto de sus opciones.

El grueso de estos cambios se produjo en el Litoral, ampliado con la incorporación de Córdoba, y se acentuó la brecha secular con el Interior, incapaz de incorporarse al mercado mundial. No

llegaron allí ni inversiones ni inmigrantes, aunque sí el ferrocarril, que, en algunos casos, al romper el aislamiento de los mercados, afectó algunas actividades locales. En cambio, hubo mayores gastos realizados por el Estado nacional, que sostuvo en parte la administración y la educación. Pero, sobre todo, pesaron el atraso relativo y las diferencias cada vez más manifiestas entre la vida agitada de las grandes ciudades del Litoral y la de las somnolientas capitales provinciales.

Hubo algunas excepciones. En el norte santafesino, una empresa inglesa, expansiva y depredadora a la vez, constituyó un verdadero enclave para la explotación del quebracho. Pero las excepciones más importantes se produjeron en Tucumán primero y en Mendoza después, en torno a la producción de azúcar y de vino. Ambas prosperaron notablemente para abastecer a los expansivos mercados del Litoral, merced a la reserva de estos productos hecha por el Estado, que los rodeó con una fuerte protección aduanera. Fue el mismo Estado el que permitió el despegue inicial de esa industria regional, construyendo los ferrocarriles y financiando las inversiones de los primeros empresarios de ingenios y bodegas. En ambos casos hubo razones de equilibrio político general, pero más inmediatamente pesaron las relaciones que importantes empresarios de las nacientes industrias -Ernesto Tornquist en la azucarera y Tiburcio Benegas en la vitivinícola- tenían en las más altas esferas oficiales. La fisonomía de Tucumán, y sobre todo la de Mendoza, donde la expansión supuso la incorporación de importantes contingentes inmigratorios, se modificaron sustancialmente, quizá contra lo que hubieran indicado las normas de la división internacional del trabajo -la azúcar tucumana siempre fue mucho más cara que la que podía importarse desde Cuba-, pero de acuerdo con la pauta de ganancia monopólica y de asociación entre el Estado y los empresarios que caracterizó toda la expansión

finisecular.

En torno del Estado se conformó un importante sector de especuladores, intermediarios y financistas cercanos al poder, que medró en concesiones, préstamos, obras públicas, compras o ventas, especialmente en la década de 1880, cuando el Estado inyectó de forma masiva crédito a través de los bancos garantidos. Los contemporáneos atribuyeron a esta fiebre especulativa la crisis de 1890, que frenó por una década el avance espectacular de la economía. Pero las causas eran más profundas y resultaron recurrentes. La estrecha vinculación de la economía argentina con la internacional la sensibilizó a sus fluctuaciones cíclicas, como había ocurrido en 1873. El fuerte endeudamiento convertía el servicio de la deuda externa en una carga onerosa, solventada con nuevos préstamos o con los saldos del comercio exterior, y ambas cosas se reducían drásticamente en los momentos de crisis cíclica, generando un período más o menos prolongado de recesión. La crisis internacional de 1890 tuvo la particularidad de desencadenarse en la Argentina y de arrastrar con ella a uno de los más importantes inversores británicos: la banca Baring. En lo inmediato, tuvo efectos catastróficos, sobre todo para los pequeños ahorristas, pero al concluir con el ciclo especulativo urbano de la década de 1880 alentó otras actividades, particularmente la agricultura, que empezó por entonces su expansión importante.

La inmigración masiva y el progreso económico remodelaron profundamente a la sociedad argentina, y podría decirse que la hicieron de nuevo. Los 1,8 millones de habitantes de 1869 se convirtieron en 7,8 millones en 1914, y en ese mismo período la población de la ciudad de Buenos Aires pasó de 180 mil habitantes a 1,5 millones. Dos de cada tres habitantes de la ciudad eran extranjeros en 1895, y en 1914, cuando ya habían nacido de ellos muchos hijos argentinos, todavía la mitad de la población de la

ciudad era extranjera. La mayoría fueron los italianos, primero del norte y luego del sur, y los siguieron los españoles, y en menor medida los franceses. Pero llegaron inmigrantes de todas partes, aunque en contingentes pequeños, al punto que se pensó en Buenos Aires como en una nueva Babel. Como señaló José Luis Romero, la nuestra fue una sociedad aluvial, constituida por sedimentación, en la que los extranjeros aparecían en todas partes, aunque naturalmente no en la misma proporción.

Al Interior fueron pocos, con excepción de lugares como Mendoza. En el Litoral, muchos se dirigieron al campo, y la mayoría se instaló precariamente, como arrendatarios. Los chacareros y sus familias fueron protagonistas de una sacrificada y azarosa empresa. Quizá porque estaban dispuestos a prosperar en poco tiempo, a sacrificarse y arriesgar su escaso capital en una apuesta muy fuerte, prefirieron vivir en rudimentarios e inhóspitos ranchos, sin las comodidades mínimas, prestos a abandonar el lugar cuando el contrato vencía. Como todos los inmigrantes, se jugaron al ascenso económico rápido, que algunos lograron y muchos no. A la larga, los primeros, o sus hijos, se integraron a las clases medias en constitución; los segundos probablemente marcharon a las ciudades o se volvieron. Lo que es seguro es que unos y otros contribuyeron a las gruesas ganancias de terratenientes y casas comerciales exportadoras, que se asociaban a los beneficios de los chacareros, pero sin participar de sus riesgos.

Al principio la mayoría iba a las ciudades, pues allí estaba la más amplia demanda de trabajadores. Las grandes ciudades, y en primer lugar Buenos Aires, se llenaron de trabajadores, en su mayoría extranjeros, pero también criollos. Sus ocupaciones eran muy diversas y su condición laboral heterogénea: había jornaleros sin calificación a la busca cada día de su conchabo, artesanos calificados, vendedores ambulantes, sirvientes y también obreros de

las primeras fábricas. En cambio, muchas de sus experiencias eran similares: vivían hacinados en los conventillos del centro de la ciudad, próximos al puerto donde muchos trabajaban, o del barrio de La Boca. Padecían difíciles condiciones cotidianas: la mala vivienda, el costo del alquiler, los problemas sanitarios, la inestabilidad en los empleos y los bajos salarios, las epidemias y los problemas de mortalidad infantil, todo lo cual conformaba un cuadro muy duro, del que al principio muy pocos escapaban. Era todavía una sociedad magmática y en formación. Los extranjeros eran además extraños entre sí, pues ni siquiera los italianos -una denominación en cierto modo abstracta, que englobaba orígenes diversos-, separados por los diferentes dialectos, podían comunicarse entre ellos. La integración de sus elementos diversos, la constitución de redes y núcleos asociativos, y la definición de identidades en ese mundo del trabajo fue un proceso lento.

Muchos de los inmigrantes, impulsados por el afán de “hacer la América” y quizá volver ricos y respetables a la aldea de donde habían salido miserables, concentraron sus esfuerzos en la aventura del ascenso individual, o más exactamente familiar. Quienes no lo lograron o fracasaron después de algún éxito inicial -y no volvieron a la patria- permanecieron dentro del conjunto de los trabajadores, renovado de manera permanente con los nuevos llegados. Fue entre ellos donde más ampliamente se desarrollaron las formas de solidaridad, estimuladas por los militantes contestatarios. Pero la mayoría obtuvo al menos algún éxito dentro de la “aventura del ascenso”. Éste consistía por lo general en llegar a tener la casa propia y quizá un pequeño negocio o taller también propio. Sobre todo, el camino pasaba por la educación de los hijos: la educación primaria permitía superar la barrera idiomática que segregaba a los padres; la secundaria abría las puertas al empleo público o al puesto de maestra, dignos y bien remunerados. La universitaria y el título

de doctor eran la llave mágica que permitía ingresar a los círculos cerrados de la sociedad constituida. Se trata sin duda de una imagen con mucho de convencional, elaborada a partir de las experiencias de los triunfadores, y que ignora la de los fracasados. Pero de cualquier modo, estas aventuras del ascenso fueron lo suficientemente importantes como para plasmar una imagen mítica de hondo arraigo y larga perduración, y para constituir las amplias clases medias, urbanas y rurales, que caracterizaron de forma definitiva nuestra sociedad.

En suma, lo que se constituyó fue una sociedad nueva, que permaneció por bastante tiempo en formación, en la que los extranjeros o sus hijos estuvieron presentes en todos los lugares, los altos, los medios y los bajos. Fue abierta y flexible, con oportunidades para todos. Fue también una sociedad escindida doblemente: por una parte, el país modernizado se diferenció del Interior tradicional; por otra, la nueva sociedad se mantuvo bastante tiempo separada de las clases criollas tradicionales, y las clases altas, un poco tradicionales pero en buena medida también nuevas, procuraron afirmar sus diferencias respecto de la nueva sociedad.

Mientras en la nueva sociedad los inmigrantes se mezclaban sin reticencias con los criollos y generaban formas de vida y de cultura híbridas, las clases altas -capaces de acoger sin reticencias a los extranjeros ricos o exitosos- se sentían tradicionales, afirmaban su argentinidad y se creían las dueñas del país al que los inmigrantes habían venido a trabajar. No todos sus miembros tenían riqueza antigua, pues entre ellos había muchos advenedizos o rastacueros, como se decía entonces, y ni siquiera todos tenían verdaderamente riqueza. Algunos lo lograron con medios dudosos, gracias a los favores del poder, y otros apenas podían conservar lo que llamaban la “decencia”. Pero todos ellos, frente a la masa de extranjeros, manifestaron una cierta voluntad de cerrarse, de recordar sus

antecedentes patricios, de ocuparse de los apellidos y la prosapia, y quienes podían, de hacer gala de un lujo y una ostentación -que quizá sus modelos europeos consideraran vulgares y chabacanos- útiles para marcar las diferencias. Esa función cumplían los lugares públicos donde mostrarse, como la Ópera, Palermo o la calle Florida, y sobre todo el club, exclusivo y a la vez educador: el Jockey, fundado por Carlos Pellegrini y Miguel Cañé para constituir una aristocracia vasta y abierta, “que comprenda a todos los hombres cultos y honorables”.

Esos mismos hombres se reservaron el manejo de la alta política. Ésta fue una actividad de “notables”, provenientes de familias tradicionales, decentes y educados, aunque no necesariamente ricos, pues en la política abundaron los *parvenus*, que harían allí su fortuna. El sistema institucional era perfectamente republicano - aunque diseñado para mediatizar las decisiones más importantes y alejarlas algo de la “voluntad popular”-, pero las prácticas electorales de la época, y sobre todo la fuerte injerencia del gobierno en cada uno de sus pasos, tendían a desalentar a quienes quisieran participar en esa competencia. En la cúspide del sistema político, la selección del personal pasaba por los acuerdos entre el presidente, los gobernadores y otros notables de prestigio reconocido. En los niveles más bajos, la competencia se daba entre caudillos electorales, que movilizaban maquinarias aguerridas, capaces -con la complicidad de la autoridad- de asaltar atrios y volcar padrones. El sistema -estigmatizado luego por la oposición política- descansaba sobre una escasa voluntad general de participación en las elecciones. Alejada de los grandes procesos democratizadores de las sociedades occidentales, la constitución de la ciudadanía fue aquí lenta y trabajosa. Particularmente, pesó el escaso interés de los extranjeros por nacionalizarse y participar de las elecciones, perdiendo algunos privilegios y garantías inherentes a su condición de tales, y esta

situación inquietó incluso a los espíritus más lúcidos de la elite dirigente, preocupados por asentar las bases consensuales del régimen político.

Quizá la característica más notable y perdurable de ese régimen haya sido la falta de competencia entre partidos políticos alternativos y su estructuración en torno de un partido único, cuyo jefe era el presidente de la república. El Partido Autonomista Nacional era en realidad una federación de gobernadores, cabezas de “situaciones” provinciales, y el presidente usaba sus atribuciones institucionales para disciplinarlos, mezclando confusamente lo que era propio del Estado con lo más específicamente político. Ausentes los mecanismos de alternancia, raquíuticos los espacios de discusión pública amplia, los conflictos se negociaban en círculos reducidos, entre la Casa Rosada y el Círculo de Armas, la redacción de un diario y los pasillos del Congreso. El sistema era eficaz cuando se trataba de diferencias en torno de convicciones comunes -como ocurrió a lo largo de la década de 1880-, pero reveló sus debilidades cuando las discrepancias se hicieron más serias, a partir de 1890. Quedó claro entonces que en el régimen político no había lugar para partes con intereses divergentes y legítimos, capaces de discrepar y de acordar, y el unicato, que había contribuido a la consolidación del régimen y a la eliminación de las antiguas confrontaciones, reveló sus limitaciones para canalizar las propuestas de cambio de una sociedad que se estaba constituyendo y diversificando, y en la que se desarrollaban intereses variados y contradictorios.

Moldear y organizar esa sociedad en formación, según sus definidas convicciones acerca del progreso, y generar en ella el consenso necesario para las vastas transformaciones que se estaban desarrollando fue quizá la preocupación principal de la elite dirigente. El panorama que se presentaba ante sus ojos era

ciertamente inquietante: una masa de extranjeros, desarraigados, escasamente solidarios, sólo interesados en lucrar y en volver a su terruño, despertaba la indignación de quienes, como Sarmiento, habían visto otrora en la inmigración el gran instrumento del progreso. Por otra parte, en el empeño de dar forma a esa masa, apareció un conjunto de competidores importantes: la Iglesia en primer lugar, aunque en el Río de la Plata su influencia era mucho menor que en el resto de Hispanoamérica; las asociaciones de las colectividades extranjeras, y particularmente la italiana, y luego los grupos políticos contestatarios, sobre todo los anarquistas, que ya esbozaban para los sectores populares un proyecto de sociedad definidamente alternativo. Frente a ellos, ese Estado todavía débil presentó combate y triunfó. En forma progresiva fue extendiendo su larga mano -por cierto, visible- sobre la sociedad, tanto para controlar su organización como para acelerar los cambios que aseguraran el progreso buscado.

Las leyes de registro civil y de matrimonio civil, inspiradas en la legislación europea más progresista, impusieron la presencia del Estado en los actos más importantes de la vida de los hombres -el nacimiento, el casamiento, la muerte-, hasta entonces regulados por la Iglesia. Posteriormente, esa presencia del Estado se reforzaría en la regulación de la higiene, del trabajo, y sobre todo con la ley de servicio militar obligatorio, que, al llegar a la mayoría de edad, colocaba a todos los hombres en situación de ser controlados, disciplinados y argentinizados. Pero en la década de 1880 el gran instrumento fue la educación primaria, y hacia ella se volcaron los mayores esfuerzos. Ésta, según la Ley 1420 de 1884, fue laica, gratuita y obligatoria. Desplazando tanto a la Iglesia como a las colectividades, que habían avanzado mucho en este terreno, el Estado asumió toda la responsabilidad: con la alfabetización aseguraba la instrucción básica común para todos los habitantes, y a

la vez la integración y nacionalización de los niños hijos de extranjeros, que si en sus hogares filiaban su pasado en alguna región de Italia o España, aprendían en la escuela que éste se remontaba a Rivadavia o a Belgrano.

Aunque la elite fue constitutivamente cosmopolita, crítica de la herencia criolla o hispana y abierta a las influencias progresistas de las metrópolis, tuvo a la vez una temprana preocupación por lo nacional, tanto para afirmar su identidad en el país aluvional como para integrar en ella a la masa extranjera. La elite patricia, que se sentía consustanciada con la construcción de la patria, se ocupó de dar forma a una versión de su historia, como lo hizo Bartolomé Mitre, que era a la vez una autojustificación. Con las mismas preocupaciones, discutieron sobre qué cosa era el arte, la música o la lengua nacional. Sobre éstos y otros temas se hablaba tanto en los círculos y en las tertulias privadas como en los periódicos y en sus redacciones, quizás en la cátedra universitaria o en el Congreso. Algunos incluso escribieron libros, que editaban en Europa. Si no hubo muchos grandes creadores, en cambio constituyeron un grupo de intelectuales que, sin especialización profesional, contribuyeron muy eficazmente a moldear las ideas de su clase. Conocieron todas las corrientes europeas, y de cada una de ellas hubo una versión local: realismo, impresionismo, naturalismo... Pero la que más se adecuó a su filosofía espontánea de la vida fue el positivismo, en su versión spenceriana, por su valoración de la eficiencia y el pragmatismo, del orden y el progreso, en todo adecuados a una sociedad que por entonces -llegando al Centenario de la Revolución de Mayo- se definía por su optimismo.

TENSIONES Y TRANSFORMACIONES

El Centenario de la Revolución de Mayo fue la ocasión que el país,

alegre y confiado, tuvo para celebrar sus logros recientes. La asistencia de la infanta Isabel de Borbón, tía del rey de España, y del presidente Montt de Chile indicaba que las hostilidades externas, viejas o nuevas, pertenecían al pasado. Intelectuales, políticos y periodistas, como Georges Clemenceau, Enrico Ferri, Adolfo Posada o Jules Huret, dejaron, cada uno a su manera, testimonio del espectacular desempeño de la república, al igual que el poeta Rubén Darío, que escribió un *Canto a la Argentina* algo pomposo. Atestiguando el carácter aluvial de nuestra sociedad, cada una de las colectividades extranjeras honró al país y a sus espectaculares logros con un monumento alusivo, cuya piedra fundamental se colocó apresuradamente ese año. Pero el discurso oficial, vacío, hueco y conformista, apenas alcanzaba a disimular la otra cara de esta realidad: una huelga general, más virulenta aún que la del año anterior -cuando coincidió con el asesinato del jefe de Policía a manos de un anarquista-, amenazó frustrar los festejos, y una bomba en el Teatro Colón puso en evidencia las tensiones y la violencia, a la que desde la sociedad establecida se respondió con los primeros episodios del terror blanco y con una draconiana ley de defensa social.

Más allá de la pompa de la celebración, una honda preocupación por el rumbo de la nación invadía los espíritus más reflexivos, ganados por un pesimismo creciente. Utilizando los modelos de la sociología positivista, y combinándolos con la historia y la psicología social, se diagnosticó que la sociedad estaba enferma. Retomando la tradición reflexiva de Sarmiento o de Alberdi, aparecieron ensayos profundos, balances descarnados y propuestas, como los que hicieron Joaquín V. González en *El juicio del siglo*, Agustín Álvarez en *Manual de patología política*, Carlos Octavio Bunge en *Nuestra América*, José María Ramos Mejía en *Las multitudes argentinas* o Ricardo Rojas en *La restauración*

nacionalista. Parte de los males se atribuían a la misma elite, su conformismo fácil y su abandono de la tradición patricia y la conciencia pública. Pero el punto central del cuestionamiento era el cosmopolitismo de la sociedad argentina, inundada por la masiva presencia de los inmigrantes y dirigida por quienes habían buscado su inspiración en Europa. Todos los conflictos sociales y políticos, todo cuestionamiento a la dirección de la elite tradicional, podían ser atribuidos a los malos inmigrantes, a los cuerpos extraños, a los extranjeros disolventes, incapaces de valorar lo que el país les había ofrecido.

Pero más allá de estas manifestaciones extremas, preocupaba la disolución de un ser nacional que algunos ubicaban en la sociedad criolla previa al alud inmigratorio y otros, más extremos, filiaban polémicamente en la ruptura con la tradición hispana. Si bien esta última posición era cuestionada por quienes seguían asociando esta tradición con la intolerancia y el atraso, en cualquier caso se dibujó en la conciencia de la elite la imagen de unas masas torvas y oscuras, desligadas de todo vínculo, peligrosas, que acechaban en las sombras y que comenzaban a invadir los ámbitos hasta entonces reservados a los hijos de la patria. En respuesta, algunos adhirieron al elitismo aristocratizante que había puesto de moda el uruguayo José Enrique Rodó con su *Ariel*. Otros buscaron la solución de cada uno de los problemas en alguna de las fórmulas de la ingeniería social, incluyendo las que había ensayado en Alemania el canciller Bismarck. Pero la mayoría encontró la respuesta en una afirmación polémica y retórica de la nacionalidad: la solución era subrayar la propia raigambre criolla, argentinizar a esa masa extraña, y a la vez disciplinarla. Desde principios de siglo, y sin duda inspirado en el clima europeo de preguerra, empezó a predominar un nacionalismo chauvinista, que José María Ramos Mejía, desde el Consejo Nacional de Educación, intentó inculcar a los niños de la escuela

primaria en sus prácticas cotidianas, y que tuvo su apogeo en los festejos de 1910, cuando las patotas de “niños bien” se complacían en hostilizar a cualquier extranjero que demorara en descubrirse al sonar las notas del Himno.

A partir de esta percepción de una enfermedad en la sociedad, ratificada por la cotidiana emergencia de conflictos y tensiones de la más variada índole, se dibujaron dos actitudes en la elite dirigente. Algunos optaron por una conducta conciliadora, haciéndose cargo de los reclamos de la sociedad y proponiendo reformas. Otros, en cambio, mantuvieron una actitud intransigente, que apeló al Estado para reprimir cualquier manifestación de descontento y, no satisfechos por un apoyo que por otra parte no se retaceaba, se organizaron para actuar por su propia cuenta.

Algunos motivos de preocupación se adivinaban en la marcha de la economía, pese a que en los primeros años del siglo la Argentina realizó lo más espectacular de su crecimiento. Un renovado empuje migratorio hizo que en 1914 casi se alcanzaran los ocho millones de habitantes, duplicando la cifra de 1895. El área cultivada alcanzó el récord de 24 millones de hectáreas, y el país llegó a ser el primer productor mundial de maíz y lino, y uno de los primeros de lana, carne vacuna y trigo. Buenos Aires -que exhibía orgullosa su subterráneo- se convirtió en la primera metrópoli latinoamericana. Sin embargo, las crisis de 1907 y 1913, y después de dos años de depresión motivados por la guerra de los Balcanes, recordaban la vulnerabilidad de ese crecimiento. La relación externa se estaba haciendo más compleja, tanto por la acrecida participación de Francia y Alemania en el comercio y las inversiones como por la presencia cada vez más agresiva de Estados Unidos en el área de los servicios públicos y la electricidad, y sobre todo en los frigoríficos. Su dominio de la técnica del *chilled*, o enfriado, le permitió ganar posiciones en el mercado externo y, tras sucesivos acuerdos por las

cuotas de exportación, llegó a controlar las tres cuartas partes del comercio de carnes con Gran Bretaña, aunque los ingleses siguieron administrando el flete y los seguros. Eran los primeros anuncios de una relación triangular, mucho más compleja que la anterior, que se profundizó cuando la industria local empezó a demandar máquinas, repuestos o petróleo, suministrados por Estados Unidos, o cuando se popularizó el uso del automóvil, y que requirió un manejo de la política económica bastante más delicado y preciso. Pero esos problemas quedaron postergados por el mucho más acucioso planteado por la Primera Guerra Mundial, que desorganizó los circuitos comerciales y financieros, retrajo las nuevas inversiones, provocó un fuerte encarecimiento de la subsistencia y dificultades en muchas industrias, aunque benefició a aquellas actividades, como la exportación de carne enlatada, destinadas al abastecimiento de los beligerantes. Aun cuando se viera en esto el efecto de una coyuntura breve y acotada a la duración del conflicto bélico, lo cierto es que nadie convalidaría en 1916, al asumir el nuevo presidente, el diagnóstico optimista y despreocupado de 1910.

Las mayores preocupaciones provenían de la emergencia de tensiones sociales, de demandas y requerimientos diversos, generalmente expresados de manera violenta, provenientes de los diversos actores que se iban definiendo a medida que la sociedad se estabilizaba y diversificaba. Las tensiones no surgieron del Interior tradicional, de existencia aletargada, sino de las zonas dinámicas del Litoral. En el ámbito rural, una primera manifestación notable fue la de los chacareros de Santa Fe, protagonistas de la primera expansión agrícola, entre quienes abundaban los propietarios. Se combinó aquí una coyuntura económica crítica -derivada de la crisis de 1890- y una decisión política del Estado, que por entonces eliminó el derecho de los extranjeros a votar en las elecciones municipales. En el mismo año se produjo la revolución de la Unión

Cívica, y en los siguientes los colonos incorporaron sus reclamos - eliminación de un impuesto gravoso y derechos políticos en los municipios- a los de los radicales. Colaboraron con ellos en la revolución de Santa Fe de 1893, donde los “colonos en armas” - especialmente los suizos- desempeñaron un papel importante, para sufrir luego la represión gubernamental y los efectos de un clima general adverso a los “gringos”.

El episodio siguiente, bastante posterior, estalló en 1912 y tuvo por actores al conjunto de los arrendatarios que habían protagonizado la notable expansión cerealera de la región del Litoral, los esforzados chacareros que al frente de pequeñas empresas familiares, y con enorme sacrificio, pudieron a veces prosperar y consolidar su posición, aunque siempre atezados por presiones permanentes: la de los terratenientes, que ajustaban periódicamente sus arriendos, estimulados por la creciente demanda de tierras originada en un flujo migratorio permanente, y la de los comercializadores, una cadena que empezaba en el bolichero del lugar y terminaba en las grandes empresas exportadoras, como Dreyfus o Bunge y Born. En épocas de buenos precios, los chacareros podían mantener un aceptable equilibrio, pero la caída de los precios internacionales en 1910 y 1911, en épocas en que los arriendos se mantenían altos, hizo crítica la situación. Por otra parte, los chacareros ya habían echado raíces en el país, se habían nucleado y delineaban los que eran sus intereses. Así, en 1912 realizaron una huelga, negándose a levantar la cosecha a menos que los propietarios de tierras satisficieran ciertas condiciones: contratos más largos, rebajas en los arriendos y otras cosas, como el derecho a contratar libremente la maquinaria para la cosecha o a criar animales domésticos. Tanto en el caso de los colonos santafesinos como en el de los arrendatarios pampeanos llama la atención el contraste entre la moderación de los reclamos -

que ni cuestionaban los aspectos básicos del sistema ni proponían alianzas con los jornaleros rurales- y la violencia de la acción en el caso de los colonos de Santa Fe, o la madurez organizativa de los arrendatarios, que iniciaron un importante movimiento cooperativo y constituyeron una entidad gremial: la Federación Agraria Argentina. Desde entonces, quedaron constituidos como un actor, que permanentemente reclamó y presionó a los terratenientes y a las autoridades.

En las grandes ciudades -sobre todo Buenos Aires y Rosario-, la definición de las identidades fue más compleja, y el resultado menos unívoco, pero de consecuencias más espectaculares. Entre los sectores populares, la heterogeneidad cultural y lingüística fue superándose en la experiencia cotidiana de afrontar las duras condiciones de vida, que estimularon la cooperación y la constitución de todo tipo de asociaciones: mutuales, de resistencia, gremiales, en torno de las cuales la sociedad popular comenzó a tomar forma. Por otra parte, la convivencia permitía la espontánea integración de las tradiciones culturales y el surgimiento de formas híbridas pero de una vigorosa creatividad, como el tango, el sainete o el lunfardo, donde confluían los elementos criollos y los muy diversos aportados por la inmigración.

Sobre esta elaboración espontánea se propusieron influir tanto la Iglesia como las grandes asociaciones de colectividades y sobre todo el Estado, que combinó coacción con educación. Pero su gran instrumento, la escuela pública, chocó en esta primera etapa con una masa de trabajadores adultos, analfabetos, casi impermeables a su mensaje. Esto dejó un ancho campo de acción para otro sector alternativo, proveniente de intelectuales contestatarios, y particularmente de los anarquistas. Ellos encontraron el lenguaje adecuado para dirigirse a una masa trabajadora dispersa, extranjera, segregada, que para actuar en conjunto necesitaba grandes

consignas movilizadoras, como la de deshacer la sociedad y volver a rehacerla, justa y pura, sin patrones y sin Estado. La huelga general y el levantamiento espontáneo eran los instrumentos imaginados para integrar a esta masa laboral fragmentada, y para hacer más eficaz la lucha por las reivindicaciones específicas de cada uno de los gremios, que los anarquistas encauzaron eficazmente. Frente al anarquismo, el Estado galvanizó su actitud represora, y la ley de residencia de 1902 autorizaba incluso la expulsión de los más díscolos. En un juego de desafíos recíprocos, la agitación social, que comenzó hacia 1890, se agudizó hacia el 1900 y culminó con las grandes huelgas de 1910, momento de apogeo de la agitación de masas y del motín urbano -aunque la organización no alcanzó un desarrollo similar-, y también de la represión.

Esta identidad, segregada y contestataria, motivo de la más seria preocupación de las clases dirigentes, no fue la única que se constituyó entre los trabajadores urbanos. Progresivamente se fue dibujando un sector de obreros más calificados, en general con una educación básica, decididos a afincarse en el país y en muchos casos ya argentinos. Entre ellos, y también entre otros sectores populares ya integrados a la sociedad urbana, encontraron su público los socialistas, que a diferencia de los anarquistas ofrecían, con un lenguaje más racional que emotivo, una mejora gradual de la sociedad en la que las aspiraciones últimas resultarían el producto de una serie de pequeñas reformas. Éstas debían lograrse en buena medida por la vía parlamentaria, por lo que incitaban a los trabajadores a que se nacionalizaran. Los socialistas obtuvieron siempre buenos resultados electorales en las ciudades a partir de la consagración en 1904 de Alfredo L. Palacios como diputado por Buenos Aires. Sin embargo, no tuvieron éxito en encauzar las reivindicaciones específicas de los trabajadores que, cuando no siguieron a los anarquistas, prefirieron a los sindicalistas. Éstos

tuvieron particular predicamento entre los grandes gremios, como los ferroviarios o los navales, y también entre los portuarios. Como los socialistas, eran partidarios de las reformas graduales, pero se desinteresaban de la lucha política y de los partidos, y centraban su estrategia en la acción específicamente gremial. Unos y otros contribuyeron -sobre todo después de 1910- a encauzar la conflictividad hacia vías reformistas y a encontrar terrenos de contacto y negociación con el Estado, donde pudo desenvolverse una actitud más conciliadora, expresada en el proyecto de Código, de inspiración bismarckiana, propuesto en 1904 por el ministro Joaquín V. González y elaborado con la colaboración de los dirigentes políticos más progresistas, y en la creación del Departamento Nacional del Trabajo en 1907.

La actividad sindical constituyó en definitiva un actor de presencia y reclamos permanentes. No alcanzaba sin embargo a expresar otras inquietudes de la sociedad, y particularmente de quienes preferían intentar el camino del ascenso antes que unir su suerte a la del conjunto de los trabajadores. Se trataba de una opción atractiva y relativamente realizable, en una sociedad que en su base era abierta y fluida. El logro de una posición económica era una aventura esencialmente individual, pero el reconocimiento social y la posibilidad de acceder a los reductos que las clases tradicionales mantenían cerrados era un problema colectivo, que se expresó en términos políticos, aun cuando éstos no agotaran las cuestiones en juego.

El sistema político diseñado por la elite, eficaz mientras la nueva sociedad se mantenía pasiva, empezó a revelar sus debilidades apenas nuevos actores hicieron oír sus voces. En 1890 se produjo una primera fractura, pues una disidencia surgida dentro mismo de los sectores tradicionales -encabezada por la juventud universitaria- encontró insospechado eco en la sociedad, golpeada

por la crisis económica. Es significativo que los principales dirigentes de los nuevos partidos -Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre- hayan luchado juntos en el Parque. El golpe afectó al régimen político, profundamente dividido, que durante tres o cuatro años zozobró, incapaz de encontrar una respuesta adecuada a un desafío que progresivamente se fue haciendo más definido. Hacia 1895, luego de un par de revoluciones sofocadas, y por obra de Carlos Pellegrini, la “gran muñeca” política del régimen, se recuperó el equilibrio, que consolidó el general Roca cuando alcanzó en 1898 la presidencia por segunda vez. Quedó sin embargo un residuo no reabsorbido: el Partido Socialista, volcado hacia los trabajadores, y la UCR, un movimiento cívico a la búsqueda de su público.

Pasada la agitación política, el radicalismo subsistió durante unos años en estado de latencia. En 1905, intentó un levantamiento revolucionario, cívico pero también militar, que fracasó como tal aun cuando tuvo un enorme efecto propagandístico, sobre todo porque estalló en momentos en que el régimen político otra vez se veía aquejado por una profunda división, originada en la ruptura ocasional entre sus dos cabezas, Roca y Pellegrini, pero que revelaba discrepancias más hondas. Así, pese al fracaso revolucionario y a la dura represión afrontada, la UCR comenzó a crecer, a conformar su red de comités y a incorporar a sectores sociales nuevos, que hacían sus primeras experiencias políticas: jóvenes profesionales, médicos, abogados, comerciantes, empresarios, y en las zonas rurales muchos chacareros, todos los cuales integraban el mundo de quienes habían recorrido con éxito los primeros tramos del ascenso, pero encontraban cerradas las puertas para el ejercicio pleno de una ciudadanía que tenía, junto con su dimensión específicamente política, otra que implicaba el reconocimiento social.

El programa del radicalismo -centrado en la plena vigencia de la

Constitución, la pureza del sufragio y una cierta moralización de la función pública- expresaba esos intereses comunes, limitados pero precisos. Aplicando los principios preconizados, la UCR, al igual que el Partido Socialista, tuvo una Carta Orgánica y una Convención, aunque siempre se respetó la preeminencia de los dirigentes históricos, la mayoría nacidos a la vida política en 1890 en el Parque. Sobre todo, tuvo un arma poderosa para enfrentar lo que con éxito denominaron “el régimen”, que era “falaz y descreído”: “la causa” se definía por su intransigencia, es decir, la negativa a cualquier tipo de transacción o acuerdo, traducida en la abstención electoral. La UCR se negaba así al eventual establecimiento de un sistema de partidos que se alternaran y compartieran las responsabilidades, e identificándose con la Nación, exigía la remoción total de un régimen que, a su vez, se había constituido sobre la base del unicato. Ciertamente, la abstención electoral - quizá la más clara expresión de la incapacidad del régimen político para dar lugar a los reclamos de la sociedad- facilitó al principio su gestión a los gobernantes, pero a la larga la condena moral resultó cada vez más efectiva.

Las tensiones que recorrían la sociedad, que expresaban su creciente complejidad, y la cantidad de voces legítimas que buscaban manifestarse resultaban más violentas y amenazantes de lo que intrínsecamente eran, por la escasa capacidad de los gobiernos para darles cabida y encontrar los espacios de negociación adecuados. Desafiados por la forma extrema de sus manifestaciones, muchos dirigentes optaron por una respuesta dura: acusar a minorías extrañas, desconocer, reprimir, y también mantener y salvaguardar los privilegios. Esta actitud tomó el presidente Manuel J. Quintana, que sucedió a Roca y reprimió el levantamiento radical de 1905. Esa postura se hizo cada vez menos sostenible, no sólo por la magnitud de la impugnación global, sino

por las dudas de los dirigentes y la creciente conciencia de su ilegitimidad, que derivaron en divisiones y debilitaron su posición, lo que permitió el avance de quienes se inclinaban por la reforma. El pasaje de Pellegrini a ese bando, al fin de la segunda presidencia de Roca, fue decisivo, lo mismo que la determinación del presidente Figueroa Alcorta, que asumió en 1906, de usar todos los instrumentos del poder para desmontar la maquinaria armada por Roca y posibilitar en 1910 la elección de Roque Sáenz Peña. Las peores armas del viejo régimen fueron puestas al servicio de una transformación que, al hacerse cargo de los argumentos del radicalismo, pretendía volver más transparente la vida política incorporando al conjunto de la población nativa a la práctica electoral. La propuesta del sufragio secreto, según el padrón militar, tendía a evitar cualquier injerencia del gobierno en los comicios, mientras que el carácter obligatorio del sufragio -que Sáenz Peña tradujo en el enfático imperativo de “¡Quiera el pueblo votar!”- apuntaba a incorporar a la ciudadanía a una masa de gente que, pese a la prédica de radicales y socialistas, no manifestaba espontáneamente mayor interés en hacerlo.

Por otra parte, la reforma electoral establecía la representación de mayorías y minorías, según la proporción de dos a uno. Quienes diseñaron el proyecto estaban absolutamente convencidos de que los partidos que representaran los intereses tradicionales ganarían sin problema las mayorías, y que la representación minoritaria quedaría para los nuevos partidos -sobre todo la UCR y quizás el Partido Socialista-, que de ese modo quedarían incorporados y compartirían las responsabilidades. Tal convicción se fundaba en la simultánea decisión del grupo reformista de modificar sus propias prácticas políticas, desplazar las maquinarias electorales que hasta entonces habían operado -representadas arquetípicamente en el mítico Cayetano Ganghi, un caudillo de la Capital portador de una

valija repleta de libretas cívicas- e incorporar a la contienda política en cada lugar a figuras de la suficiente envergadura social e intelectual como para atraer a sus electores en forma espontánea y sin necesidad de trampas. Se trataba, en suma, de erradicar la política criolla y constituir un partido de “notables”, favorecido sin duda por la obligatoriedad del sufragio, que ayudaría a romper el aparato de caudillos hasta entonces dominante.

Aprobada la ley en 1912, las primeras elecciones depararon una fuerte sorpresa para quienes habían diseñado la reforma: si bien los partidos tradicionales ganaron en muchas provincias -donde los gobiernos encontraron la forma de seguir ejerciendo su presión-, los radicales se impusieron en Santa Fe y en la Capital, donde los socialistas obtuvieron el segundo lugar. La perspectiva del triunfo arrastró a mucha gente al radicalismo, que en esos años se convirtió en un partido masivo, constituyó su red de comités y de caudillos y se empapó de muchos de los mecanismos de la política criolla. Hipólito Yrigoyen, un misterioso dirigente que nunca hablaba en público, pero incansable en la tarea de recibir a los hombres de su partido, se convirtió en un líder de dimensión nacional. Para enfrentarlo, los grupos tradicionales, que ya empezaban a ser denominados conservadores, intentaron organizar un partido orgánico, de dimensión nacional como el radical, sobre la base de los distintos grupos o “situaciones” provinciales. Lisandro de la Torre -fundador de un partido “nuevo”, la Liga del Sur de Santa Fe- fue el candidato de lo que emblemáticamente se llamó el Partido Demócrata Progresista. Pero el éxito del proyecto era cada vez más dudoso, y muchos dirigentes, encabezados por el gobernador de Buenos Aires Marcelino Ugarte, reticentes al proyecto de la reforma política, y mucho más ante un dirigente profundamente liberal como De la Torre, prefirieron plantear su propia alternativa. Divididos los conservadores, los radicales -que

también afrontaban sus propias divisiones- se impusieron de forma ajustada, en una elección que, en 1916, inauguraba una etapa institucional y social sustancialmente novedosa.

II. Los gobiernos radicales, 1916-1930

HIPÓLITO YRIGOYEN fue presidente entre 1916 y 1922, año en que lo sucedió Marcelo T. de Alvear. En 1928, fue reelegido Yrigoyen, para ser depuesto por un alzamiento militar el 6 de septiembre de 1930. Pasarían 59 años antes de que un presidente electo transmitiera el mando a su sucesor, de modo que esos 12 años, en que las instituciones democráticas comenzaron a funcionar regularmente, resultaron a la larga un período excepcional.

Aunque los dos eran radicales, y habían compartido las largas luchas del partido, ambos presidentes eran muy diferentes entre sí, y más diferentes aún fueron las imágenes que de ellos se construyeron. La de Yrigoyen fue contradictoria desde el principio: para unos, era quien -todo probidad y rectitud- venía a develar el ignominioso régimen y a iniciar la regeneración; hubo incluso quienes lo vieron como una suerte de santón laico. Para otros, era el caudillo ignorante y demagogo, expresión de los peores vicios de la democracia. Alvear en cambio fue identificado, para bien o para mal, con los grandes presidentes del viejo régimen, y su política se asimiló con los vicios o virtudes de aquél. Tan disímiles como fueran sus estilos personales, uno y otro debieron afrontar problemas parecidos, y sobre todo el doble desafío de poner en pie las flamantes instituciones democráticas y conducir, por los nuevos

canales de representación y negociación, las demandas de reforma de la sociedad, que el radicalismo de alguna manera había asumido.

Esa orientación reformista no era exclusiva de la Argentina: en Uruguay la había encarnado desde 1904 el presidente Batlle y Ordóñez, así como desde 1920 lo haría Arturo Alessandri en Chile. En México, con alternativas mucho más dramáticas, la revolución estallada en 1910 y consolidada en 1917 había emprendido igualmente una profunda transformación del Estado y la sociedad, mientras que otros movimientos reformistas, como la peruana Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), aunque no llegaron a triunfar, conmovieron a algunos de los regímenes oligárquicos o dictatoriales que en general predominaban en América Latina. En todos los casos, los reclamos de participación política se relacionaban con mejoras en la situación de los distintos sectores sociales. Ese mandato y esa voluntad reformista, que sin duda caracterizaron al radicalismo, y que habían surgido en el proceso de expansión previa, se desarrollaron en circunstancias marcadamente distintas e infinitamente más complejas que aquellas que ambos imaginaron. La Primera Guerra Mundial, particularmente, modificó todos los datos de la realidad: la economía, la sociedad, la política o la cultura. Enfrentado con una situación nueva, no resultaba claro si el radicalismo tenía respuestas o, siquiera, si estaba preparado para imaginarlas.

La guerra misma constituyó un desafío y un problema difícil de resolver. Inicialmente Yrigoyen mantuvo la política de Victorino de la Plaza, su antecesor: la “neutralidad benévola” hacia los aliados suponía continuar con el abastecimiento de los clientes tradicionales, y además concederles créditos para financiar sus compras. En 1917, Alemania inició, con sus temibles submarinos, el ataque contra los buques comerciales neutrales, empujando a la guerra a Estados Unidos, que pretendió arrastrar consigo a los

países latinoamericanos. La Argentina había resistido tradicionalmente las apelaciones del panamericanismo, una doctrina que suponía la identidad de intereses entre Estados Unidos y sus vecinos americanos; pero el hundimiento de tres barcos mercantes por los alemanes movilizó una amplia corriente de opinión a favor de la ruptura, que era impulsada por los estadounidenses y entusiastamente apoyada por los diarios *La Nación* y *La Prensa*. Las opiniones se dividieron de un modo singular: el Ejército -cuya formación profesional era germana- tenía simpatías por Alemania, mientras que la Marina se alineaba por Gran Bretaña. La oposición conservadora era predominantemente rupturista, al igual que la mayoría de los socialistas, aunque en abril de 1917 se produjo entre ellos una escisión que, siguiendo a la Unión Soviética, adhirió al neutralismo. Los radicales estaban muy divididos en torno a esta cuestión, que prefiguraba futuras fracturas, y dirigentes destacados como Leopoldo Meló o Alvear se manifestaron a favor de Inglaterra y Francia, mientras Yrigoyen, casi tozudamente, defendió una neutralidad que, si no lo enemistaba con los aliados europeos, lo distanciaba de Estados Unidos. Yrigoyen tuvo varias actitudes de hostilidad hacia ese país: en 1919 ordenó que una nave de guerra saludara el pabellón de la República Dominicana, ocupada por los *marines* estadounidenses, y en 1920 se opuso al diseño que el presidente Wilson había hecho de la Liga de las Naciones. También, había proclamado el 12 de octubre -aniversario del viaje de Colón- como Día de la Raza, oponiendo al panamericanismo la imagen de una Hispanoamérica que excluía a los vecinos anglosajones.

Fue una decisión de fuerte valor simbólico, que entroncaba en una sensibilidad social difusa en sus formas, pero hondamente arraigada. El sentimiento antiestadounidense había venido creciendo desde 1898, cuando la guerra de Cuba inauguró la fase

fuerte de su expansionismo, y conducía por oposición a la postulación de algún tipo de identidad latinoamericana. En esta actitud los motivos tradicionales se mezclaban con los más avanzados y progresistas. José Enrique Rodó, un escritor de profunda influencia, había identificado en *Ariel* a Estados Unidos con el materialismo, contraponiéndolo al espiritualismo hispanoamericano. Yrigoyen se unió a quienes -poniendo distancia del cosmopolitismo dominante- encontraban esa identidad en la común raíz hispana, mientras que otros distinguieron el filibusterismo depredador de los yanquis del más tolerable imperialismo, discreto y civilizador, de los británicos. En otros ámbitos, el sentimiento antiestadounidense se vinculó con las ideas socialistas, como en el caso de Manuel Ugarte, que en 1924 escribió *La patria grande*. La postulación de una unidad latinoamericana militante contra el agresor fue reforzada por la Revolución Mexicana: en 1922, con motivo de la visita del mexicano José Vasconcelos, José Ingenieros y otros intelectuales progresistas impulsaron una Unión Latinoamericana, que recogía los motivos del antiimperialismo también presentes en otro movimiento de dimensión latinoamericana: la Reforma Universitaria.

CRISIS SOCIAL Y NUEVA ESTABILIDAD

En esta dimensión fuertemente simbólica y declarativa, el gobierno radical pudo dar respuestas originales y acordes con las nuevas expectativas, pero no ocurrió lo mismo cuando debió enfrentar problemas más concretos, como los que suscitó en la sociedad la Primera Guerra Mundial. Las condiciones sociales, que ya eran complicadas en el momento de su estallido, se agravaron luego por las dificultades del comercio exterior y de la retracción de los capitales: en las ciudades se sintió la inflación, el retraso de los

salarios reales -los de los empleados públicos incluso sufrieron rebajas- y la fuerte desocupación. La guerra perjudicó las exportaciones de cereales, y particularmente las de maíz, y en las zonas rurales agravó la situación ya deteriorada de los chacareros y también la de los jornaleros. Se conformó así un clima de conflictividad que se mantuvo más o menos latente mientras las condiciones fueron muy adversas para los trabajadores, pero que empezó a manifestarse plenamente desde 1917, apenas comenzaron a notarse en la economía signos de reactivación. Se inició entonces un ciclo breve pero violento de confrontación social que alcanzó su momento culminante en 1919 y se prolongó hasta 1922 o 1923. Esa ola de convulsiones se desarrollaba de manera parecida en todo el mundo occidental, recogiendo los ecos, primero, de la revolución soviética de 1917 y, luego, de los movimientos revolucionarios que estallaron, apenas terminó la guerra, en Alemania, Italia y Hungría. La impresión de que la revolución mundial era inminente operó en cierta medida como ejemplo para los trabajadores, pero mucho más lo hizo como revulsivo para las clases propietarias. La revolución se mezcló con la contrarrevolución, y entre ambas hirieron de muerte a las democracias liberales: en medio de la crisis de valores desatada en la posguerra, éstas fueron ampliamente cuestionadas por distintos tipos de ideologías y de movimientos políticos, que iban desde las dictaduras lisas y llanas -como la establecida en España en 1923 por el general Primo de Rivera- hasta los nuevos experimentos autoritarios de base plebiscitaria, como el iniciado en Italia en 1922 por Benito Mussolini, cuyas formas novedosas ejercieron una verdadera fascinación.

Las huelgas comenzaron a multiplicarse en las ciudades a lo largo de 1917 y 1918, impulsadas sobre todo por los grandes gremios del transporte, la Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, cuya fuerza se incrementaba por

su capacidad de obstaculizar o paralizar el embarque de las cosechas, un recurso que usaron y dosificaron con prudencia. Conducidos por el grupo de los sindicalistas, que dirigían la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) del IX Congreso (para distinguirla de la FORA del V, anarquista), tuvieron éxito en buena medida por la nueva actitud del gobierno, que abandonó la política de represión lisa y llana y obligó a las compañías marítimas y ferroviarias a aceptar su arbitraje. Coincidió así una actitud sindical que combinaba la confrontación y la negociación y otra del gobierno que, mediante el simple recurso de no apelar a la represión armada, creaba un nuevo equilibrio y se colocaba en posición de árbitro entre las partes. Los éxitos iniciales fortalecieron la posición de la FORA sindicalista, cuyos afiliados aumentaron notablemente en los años siguientes, y que impuso su estrategia de confrontación limitada. No obstante, la predisposición negociadora del gobierno no se manifestó en todos los casos y -según ha señalado David Rock- parecía dirigirse especialmente a los trabajadores de la Capital -potenciales votantes de la Unión Cívica Radical (UCR), en un distrito en el que ésta dirimía una dura confrontación con los socialistas-, pero no se extendía ni hacia los sindicatos con mayoría de extranjeros ni a los trabajadores de las provincias de Buenos Aires. Así, la huelga de los frigoríficos de 1918 fue enfrentada con los tradicionales métodos de represión, despidos y rompeshuelgas, que también se aplicaron en 1918 a los ferroviarios, cuando su acción traspasó los límites de la prudencia y amenazó el vital embarque de la cosecha.

Tanto los sindicalistas como el gobierno transitaban por una zona de equilibrio muy estrecha, que la propia dinámica del conflicto terminó por clausurar a lo largo de 1919, cuando la ola huelguística llegó a su culminación. En enero, con motivo de una huelga en un establecimiento metalúrgico del barrio obrero de

Nueva Pompeya, se produjo una serie de incidentes violentos entre los huelguistas y la Policía, que abandonó la pasividad y reprimió con ferocidad. Hubo muertos de ambas partes, y pronto la violencia se generalizó. Una sucesión de breves revueltas no articuladas, espontáneas y sin objetivos precisos hizo que durante una semana la ciudad fuera tierra de nadie, hasta que el Ejército encaró una represión en regla. Contó con la colaboración de grupos de civiles armados, organizados desde el Círculo Naval, que se dedicaron a perseguir a judíos y catalanes, que identificaban con “maximalistas” y anarquistas. Todavía por entonces el gobierno pudo apelar a sus contactos con los socialistas y los dirigentes de la FORA para acordar el fin de la huelga inicial de Vasena, así como para negociar el cese del largo y pacífico conflicto que simultáneamente mantenía el gremio marítimo.

La Semana Trágica -así se la llamó- galvanizó a los trabajadores de la ciudad y de todo el país. Lejos de disminuir, el número y la intensidad de las huelgas aumentaron a lo largo de 1919: infinidad de movimientos fueron protagonizados por trabajadores no agremiados, pertenecientes a las más variadas actividades industriales y de servicios, entre quienes la consigna de la huelga general ayudaba a la identificación y unificación. Estos movimientos coincidieron con un nuevo pico de las movilizaciones rurales. Los chacareros, que, dirigidos por la Federación Agraria Argentina, mantenían desde 1912 sus reivindicaciones por las condiciones de los contratos, encararon nuevas huelgas, empujados por las difíciles condiciones creadas por la guerra. Su movilización coincidió con la de los jornaleros de los campos y de los pueblos rurales, generalmente movilizados por los anarquistas, aunque los chacareros procuraron diferenciarse de ellos con claridad. Pese a que los radicales habían simpatizado con ellos en 1912, el gobierno fue poco sensible a sus reclamos, y en 1919, acusando a los

“maximalistas”, encaró una fuerte represión.

El año 1919 marcó una inflexión en la política gubernamental hacia estos movimientos de protesta. Hasta entonces, una actitud algo benévola y tolerante, acompañada de la no utilización de los recursos clásicos de la represión -el envío de tropas, los despidos, la contratación de rompehuelgas- había bastado para ampliar el espacio de manifestación de la conflictividad acumulada y para equilibrar la balanza, hasta entonces sistemáticamente favorable a los patrones. Es probable que en la acción de Yrigoyen se combinaran, junto con mucho de cálculo político, una actitud más sensible a los problemas sociales y una idea del papel arbitral que debía asumir el Estado, y quizás él mismo. Pero esa nueva actitud estuvo lejos de materializarse en instrumentos institucionales, pese a la manifiesta voluntad negociadora de las direcciones sindicales. Los avances realizados a principios de siglo, cuando se creó el Departamento de Trabajo o se propuso el Código del Trabajo, no se continuaron, y el Poder Ejecutivo no supo idear mecanismos más originales que la recurrencia -igual que en 1850- a la acción arbitral del jefe de Policía, responsable desde tiempo inmemorial de los problemas laborales. Tampoco el Congreso asumió que debía intervenir en los conflictos urbanos, considerándolos una mera cuestión policial, aunque sí lo hizo con los chacareros: en 1921 sancionó una ley de arrendamientos que tenía en cuenta la mayoría de sus reclamos acerca de los contratos, y que sin duda contribuyó -junto con un retorno de la prosperidad agrícola- a acallar los reclamos de quienes, cada vez más, se definían como pequeños empresarios rurales.

Luego de la experiencia de 1919, y fuertemente presionado por unos sectores propietarios reconstituidos y galvanizados, el gobierno abandonó sus veleidades reformistas y retomó los mecanismos clásicos de la represión, ahora con la colaboración de la

Liga Patriótica, que en 1921 alcanzaron incluso a la Federación Marítima, el sindicato con el que Yrigoyen estableció vínculos más fuertes y durables. Por entonces, y por diferentes razones, la ola huelguística se había atenuado en las grandes ciudades, aunque perduraba en zonas más alejadas y menos visibles: en el enclave quebrachero que La Forestal había establecido en el norte de Santa Fe, en el similar de Las Palmas en el Chaco Austral o en las zonas rurales de la Patagonia. En esos lugares, los anónimos e impredecibles efectos de la coyuntura económica internacional, traducidos por empresas voraces e incontroladas en acciones concretas en perjuicio de los trabajadores, hicieron estallar entre 1919 y 1921 fuertes movimientos huelguísticos. El gobierno autorizó a que fueran sometidos mediante sangrientos ejercicios de represión militar que alcanzaron justa celebridad, como en el caso de la Patagonia.

La experiencia de 1919 tuvo profundos efectos entre los sectores propietarios. Derrotados en 1916, conservaron inicialmente mucho poder institucional -que Yrigoyen fue minando en forma paulatina- y todo su poder social, pero estaban a la defensiva, sin ideas ni estrategia para hacer frente a un proceso político y social que les desagradaba pero que sabían legitimado por la democracia. En 1919, los fantasmas de la revolución social los despertaron bruscamente: la Liga Patriótica Argentina, fundada en las calientes jornadas de enero, fue la primera expresión de su reacción. Confluyeron en ella los grupos más diversos: la Asociación del Trabajo -una institución patronal que suministraba obreros rompehuelgas-, los clubes de elite, como el Jockey, los círculos militares -la Liga se organizó en el Círculo Naval- o los representantes de las empresas extranjeras. Conservadores y radicales coincidieron y se mezclaron en los tramos iniciales -su presidente, Manuel Carlés, fluctuó durante su vida entre ambos

partidos- y el Estado le prestó un equívoco apoyo a través de la Policía. Lo más notable fue la capacidad que la Liga demostró en ese *annus mirabilis* para movilizar vastos contingentes de la sociedad, reclutados en sus sectores medios, para la defensa del orden y la propiedad y la reivindicación chauvinista del patriotismo y la nacionalidad, amenazada por la infiltración extranjera. También fue notable su capacidad para organizar gran número de “brigadas”, que asumían la tarea de imponer el orden a palos -luego fueron muy activas en el medio rural-, y para presionar al gobierno, que probablemente tuvo muy en cuenta la magnitud de las fuerzas polarizadas en torno de la Liga cuando a lo largo de 1919 imprimió un giro, sutil pero decisivo, a su política social.

La derecha tenía un nuevo impulso y un argumento decisivo, aunque todavía impreciso, contra la democracia: voluntaria o involuntariamente, Yrigoyen era sospechoso de subvertir el orden. Desde entonces, cobraron forma una serie de tendencias ideológicas y políticas que circulaban ampliamente en el mundo de la contrarrevolución. La Liga aportó los motivos del orden y la patria. Los católicos combinaron el pensamiento social -capaz de competir con la izquierda- con el integrismo antiliberal, que empezó a difundirse a través de los Cursos de Cultura Católica y cristalizó más tarde en la revista *Criterio*, fundada en 1928. Jóvenes intelectuales, como los hermanos Irazusta, difundieron las ideas de Maurras, y Leopoldo Lugones proclamó la llegada de “la hora de la espada”. Sin duda había discordancias en estas voces, y no menores -Lugones era declaradamente anticristiano-, pero esto no preocupaba a su auditorio, que probablemente no tomaba demasiado en serio mucho de lo que oía pero recogía en todas ellas un mensaje común: el rechazo a la movilización social y la crítica a la democracia liberal.

La llegada al gobierno de Alvear, en 1922, tranquilizó en parte a

las clases propietarias. La mayoría volvió a confiar en las bondades de la democracia liberal y patricia, pero el nuevo discurso siguió operando en ámbitos marginales. Mientras tanto, fueron otras poderosas instituciones las encargadas de dar progresivamente fuerza al nuevo movimiento, unificar sus acciones, dotarlas de legitimidad, y también reclutar sostenedores más allá de los propios sectores propietarios. La Liga Patriótica se dedicó al “humanitarismo práctico”, organizando escuelas para obreras y movilizand o a las “señoritas” de la alta sociedad. Mucho más importante fue la acción de la Iglesia, que en 1919, en el pico de la crisis, organizó la Gran Colecta Nacional, destinada a movilizar a los ricos e impresionar a los pobres. Ese año, fueron unificadas todas las instituciones católicas que actuaban en la sociedad -con tendencias y propuestas diversas- dentro de la Unión Popular Católica Argentina, un ejército laico comandado unificadamente por los obispos y los curas párrocos, quienes organizaron una guerra en regla contra el socialismo, compitiendo palmo a palmo en la creación de bibliotecas, dispensarios, conferencias y obras de fomento y caridad, tareas éstas en las que los activistas reclutados en los altos círculos sociales adquirían la conciencia de su alta misión redentora. Sintomáticamente, la Iglesia -cada vez más reacia a las instituciones democráticas- clausuraba la posibilidad de crear un partido político. El Ejército, por último, que había sido organizado desde principios de siglo sobre bases estrictamente profesionales, empezó a interesarse en la marcha de los asuntos políticos, quizá molesto por la forma en que Yrigoyen lo empleaba para abrir o cerrar la válvula del control social, y quizá también preocupado por el uso que el presidente hacía de criterios políticos en el manejo de la institución. Lo cierto es que la desconfianza a Yrigoyen fue creando las condiciones para hacerlo receptivo a las críticas más generales al sistema democrático, que con fuerza creciente se

escuchaban en la sociedad.

El antiliberalismo que nutría todas estas manifestaciones resultó eficaz como arma de choque, como discurso unificador y como bandera de combate. Pero la reconstitución de la derecha política no se agotó en esto. No escapaba a nadie que no podía volverse a 1912, que el mundo había cambiado mucho desde la Gran Guerra, y que era necesario volver a discutir cuál era el lugar de la Argentina, qué papel debía cumplir el Estado en los conflictos sociales, cómo podían articularse los distintos intereses propietarios, y muchas cuestiones más, acerca de las cuales el gobierno de Yrigoyen no parecía demasiado urgido en aportar soluciones novedosas. La Liga Patriótica organizó congresos donde representantes de los más diversos sectores discutieron sobre todo esto, y también lo hicieron a través de las publicaciones del Museo Social Argentino o en la *Revista de Economía Argentina*, que Alejandro Bunge fundó en 1918. Una Argentina distinta requería ideas nuevas, y en ese sentido la discusión fue intensa. Es posible, incluso, que en ese clima algunos jóvenes militantes del Partido Socialista -con una sólida formación de raigambre marxista en cuestiones económicas y sociales- pensaran que los marcos del partido eran demasiado estrechos.

¿Hasta qué punto eran justificados los terrores de la derecha? La ola de huelgas, que culminó entre 1917 y 1921, había sido formidable, pero no estaba guiada por un propósito explícito de subversión del orden, sino que expresaba, de manera ciertamente violenta, la magnitud de los reclamos acumulados durante un largo período de dificultades de la Argentina hasta entonces opulenta. Por otra parte, entre quienes podían presentarse como conductores de ese movimiento, los que propiciaban dicha subversión -los anarquistas, y luego los comunistas- sólo tenían una influencia marginal e ínfima. Las direcciones y orientaciones más fuertes

correspondían a la corriente de los “sindicalistas” y a los socialistas, y ambos bregaban tanto por reformas limitadas en un orden social que aceptaban en sus rasgos básicos como, sobre todo, por encontrar los mecanismos y los ámbitos de negociación de los conflictos. Los sindicalistas, reacios a la acción política partidaria, apostaron a la negociación entre los sindicatos y el Estado, un camino que ya había sido propuesto desde el Estado antes de 1916 y que, retomado por Yrigoyen, debió ser abandonado en la convulsión de 1919, aunque ciertamente se mantuvo como tendencia, para reaparecer en forma espectacular al fin de la Segunda Guerra Mundial.

El Partido Socialista -fundado en 1896 y de una fuerza electoral considerable en la Capital- también estaba lejos de posturas de ruptura. De acuerdo con lo que eran las líneas dominantes en Europa, el socialismo era visto como la coronación y el perfeccionamiento de la democracia liberal, como la última instancia de una modernización que debía remover obstáculos tradicionales. Entre ellos, los socialistas subrayaban lo que llamaban la “política criolla”, en la que englobaban, junto al conservadurismo tradicional, al radicalismo, al que se opusieron con fuerza. El Partido Socialista tuvo escasa capacidad para arraigar en los movimientos sociales de protesta: algunos éxitos entre los chacareros de la Federación Agraria no compensaron su escasísimo peso entre los gremialistas, que aunque votaran a los socialistas preferían seguir a los sindicalistas. El socialismo apostó todas sus cartas a las elecciones, y reunió en la Capital un importante caudal de votos, con el que compitió exitosamente con los radicales, pero a costa de diluir lo que quizás hubieran sido reclamos específicos de los trabajadores dentro de un conjunto más amplio de demandas, que incluía a los sectores medios. Esto dejaba libre un espacio a su izquierda, por el que compitieron diversos grupos, sobre todo luego

del remezón de la guerra y la revolución soviética. Pacifistas, partidarios de la Tercera Internacional y de la Unión Soviética confluyeron finalmente en el Partido Comunista, que durante los años veinte tuvo escasísimo peso, aunque cosechó muchas simpatías entre los intelectuales. Pero otras tendencias progresistas, de alguna manera emparentadas con el leninismo, emergieron en el antiimperialismo de esa época y en el pensamiento de la Reforma Universitaria.

Los socialistas apostaron a la acción legislativa y a la posibilidad de crear en el Congreso un ámbito de representación. Pero había en el partido una incapacidad casi constitutiva para establecer alianzas o acuerdos y, aunque impulsaron algunas reformas legislativas, no lograron dar forma a una fuerza política vigorosa, capaz de equilibrar a la derecha reconstituida o, siquiera, de precisar los puntos centrales del conflicto que se avecinaba. Su otra apuesta fue -a largo plazo- la ilustración de la clase obrera que, según suponían, se esclarecería en el contacto con la ciencia. De ahí su intensa acción educadora, a través de centros, bibliotecas, conferencias, grupos teatrales y corales y la Sociedad Luz. La difusión de ciertas prácticas en los grandes centros urbanos atestigüa adecuadamente los cambios que -superada la crisis social- estaban experimentando los trabajadores y la sociedad toda.

El fin de la lucha gremial intensa, la reducción de la sindicalización y el debilitamiento de la Unión Sindical Argentina dan testimonio de la atenuación de los conflictos sociales. La Unión Ferroviaria, fundada en 1922 y convertida en cabeza indiscutida del sindicalismo, expresó el nuevo tono de la acción gremial: un sindicato fuertemente integrado, dirigido en forma férrea y centralizada, negoció de manera sistemática y orgánica con las autoridades, descartó la huelga como instrumento y obtuvo éxitos sustanciales. Por su parte, el Estado manifestó la voluntad de

avanzar en una legislación social -sancionada en su mayoría durante la presidencia de Alvear- que suponía a la vez el pleno reconocimiento del actor gremial: propuesta de regímenes jubilatorios para empleados de comercio y ferroviarios, regulación del trabajo de mujeres y niños y establecimiento del 1º de Mayo -convertido en un conciliador Día del Trabajo- como feriado nacional.

Más allá de las coyunturas y de las revulsiones, la sociedad argentina venía experimentando cambios profundos, que maduraron luego de la guerra y que explican este apaciguamiento. Aunque luego del conflicto se reanudó la inmigración, la población ya se había nacionalizado sustancialmente. Los hijos argentinos ocuparon el lugar de los padres extranjeros, las asociaciones de base étnica empezaron a retroceder frente a otras en las que la gente, sin distinción de origen, se agrupaba para actividades específicas, y la “cuestión nacional”, que tanto preocupó en el Centenario, empezó a desdibujarse. La acción sistemática de la escuela pública había generado una sociedad fuertemente alfabetizada, y con ella un público lector nuevo, quizá no demasiado entrenado pero ávido de materiales. Crecieron los grandes diarios, con linotipos y rotativas; en 1913, *Crítica*, que respondía a ese nuevo público, y a la vez lo moldeaba, revolucionó las formas periodísticas, y otra vez lo hizo desde 1928 *El Mundo*. Las variadas necesidades de información y entretenimiento fueron satisfechas por los *magazines*, que siguieron la huella de *Caras y Caretas* y culminaron en *Leoplán*, o un amplio espectro de revistas especializadas, como *El Gráfico*, *Billiken*, *Tit Bis* o *El Hogar*. En los años siguientes a la guerra hicieron furor las novelas semanales -un género entre sentimental y tenuemente erótico-, mientras que las necesidades culturales o políticas más elaboradas eran satisfechas, primero, por las ediciones españolas de Sempere y, luego, por las bibliotecas de Claridad o Tor. En una

sociedad ávida de leer, estas publicaciones eran vehículo eficaz de diversos mensajes culturales y políticos, que circulaban también por las bibliotecas populares o las conferencias. Muchos leían para entretenerse. Otros buscaban capacitarse para aprovechar las múltiples oportunidades laborales nuevas, pero otros muchos lo hacían para apropiarse de un caudal cultural -tan variado que incluía desde Platón hasta Fedor Dostoievski- que hasta entonces había sido patrimonio de la elite y de las clases más establecidas.

La expansión de la cultura letrada formó parte del proceso de movilidad social propio de una sociedad que era esencialmente expansiva y de oportunidades. Fruto de ella eran esos vastos sectores medios, en cuyos miembros podían advertirse los resultados de una exitosa aventura del ascenso: los chacareros establecidos, que se identificaban como pequeños empresarios rurales, o los pequeños comerciantes o industriales urbanos, de entre quienes surgían algunos grandes nombres o fortunas importantes. Junto a ellos, una nube de empleados, profesionales, maestras o doctores, pues ese título siguió siendo la culminación, en la segunda o quizá la tercera generación, de esta carrera en la que la fortuna no podía separarse del prestigio.

Quizá por eso la universidad constituyó un problema importante para esta sociedad en expansión, y la Reforma Universitaria -un movimiento que estalló en Córdoba en 1918 y se expandió por el país y por toda América Latina- fue una expresión de esta transformación. Las universidades, cuyo propósito dominante se basaba en formar profesionales, eran por entonces socialmente elitistas y académicamente escolásticas. Muchos jóvenes estudiantes quisieron abrir sus puertas, participar en su dirección, remover las viejas camarillas profesorales, instaurar criterios de excelencia académica y de actualización científica, y vincular la universidad con los problemas de la sociedad. La

agitación estudiantil fue muy intensa y coincidió con lo más duro de la crisis social, entre 1918 y 1922, al punto que muchos pensaron que era una expresión más de aquélla. Otros advirtieron que se trataba de un reclamo tolerable. Los reformistas recibieron el importante apoyo de Yrigoyen, lograron en muchos casos que se incorporaran representantes estudiantiles al gobierno de las universidades, que se desplazara a algunos de los profesores más tradicionales y que se introdujeran nuevos contenidos y prácticas. También elaboraron un programa de largo plazo, que desde entonces sirvió de bandera a la actividad política estudiantil, un espacio que a partir de ese momento sirvió de antesala para la política mayor. El reformismo universitario fue, más que una teoría, un sentimiento, expresión de un movimiento de apertura social e intelectual que servía de aglutinante a las ideologías más diversas, desde el marxismo hasta el idealismo, pero que se nutrió sobre todo del antiimperialismo latinoamericano, todavía difuso, y de la misma Revolución Rusa, con su apelación a las masas. Se vinculó con otras vertientes latinoamericanas, creando una suerte de hermandad estudiantil, e inyectó un torrente nuevo y vital en los movimientos políticos progresistas.

Pero además, expresaba algunas tendencias hacia las que la nueva sociedad era particularmente sensible. A pesar de que, avanzando en la década de 1920, los movimientos sociales contestatarios estaban en declinación, y de que la fuerte movilidad social desalentaba los enfrentamientos de clase por entonces dominantes en Europa, hubo en esta sociedad una fuerte corriente reformista. Confluyeron en ella diversas experiencias de cooperación y cambio -desde la de los chacareros aglutinados en sus cooperativas hasta las de las sociedades de fomento en los nuevos barrios urbanos- que se alimentaron con las corrientes del pensamiento social y progresista de Europa y dieron el tono a una

actitud reflexiva y crítica acerca de la sociedad y sus problemas. Esta actitud se fue plasmando en una cierta idea de la justicia social, probablemente alimentada a su vez desde fuentes ideológicas más tradicionales -como la de la Iglesia- pero igualmente preocupadas por la necesidad de adaptar las instituciones a una sociedad en cambio. Se trataba de una idea aún imprecisa, que no alcanzó a concretarse en una representación política eficaz, pero que circulaba también en el mundo de los trabajadores. Ellos mismos, influidos por la movilidad social y por las imágenes que ella creaba, se identificaban cada vez en menor medida con aquel sector segregado de la sociedad que, a principios de siglo, inquietaba a los intelectuales. No era fácil distinguir, fuera del trabajo, a un obrero ferroviario de un empleado, o a su hija de una maestra. En las grandes ciudades, y en las áreas rurales prósperas, se estaba constituyendo una sociedad más caracterizada por la continuidad que por los cortes profundos.

La aspiración al ascenso individual y a la reforma social fue sólo un aspecto de esa nueva cultura que caracterizaba a estos sectores populares, entre trabajadores y medios. Los cambios en las formas de vida estaban modelando nuevas ideas y actitudes, que resultaron perdurables. El acceso a la vivienda propia cambió la idea del hogar y ubicó a la mujer -liberada de la obligación de trabajar- en el centro de la familia, que pronto se reuniría en torno del aparato de radio. Por un movimiento complementario, las hijas aspiraron a trabajar, en una tienda o en una oficina, a estudiar, y también a una creciente libertad sexual. Una cierta holgura económica y la progresiva reducción de la jornada de trabajo -que además del domingo empezó a incluir el “sábado inglés”- aumentaron el tiempo libre disponible. Ello explica el éxito de bibliotecas, conferencias y lecturas, pero también el desarrollo de una gama muy variada de ofertas para llenarlo.

El teatro había llegado a su apogeo ya hacia 1910. En las ciudades las salas se multiplicaron, tanto en el centro como en los barrios, y los grandes actores, como Florencio Parravicini, fueron quizá las primeras figuras que gozaron de una popularidad indiscutida. Después de la guerra, los gustos se deslizaron del tradicional sainete a la nueva revista, con “bataclanas” y con canciones. El tango fue definitivamente aceptado por la sociedad y despojado de los rastros de su origen prostibulario. El tango-canción y el fonógrafo hicieron la popularidad de los cantantes, mientras las partituras, junto con los infaltables pianos, lo afincaron en las casas de clase media. Por entonces se cimentó la popularidad de Enrique Delfino, Enrique Santos Discépolo y Carlos Gardel, quien sin embargo sólo alcanzó su consagración popular en la década siguiente, a través de las películas que filmó en el extranjero. El cine -mudo hasta 1929- ejerció una fuerte atracción; las salas proliferaron en las ciudades y la cultura popular que se estaba acuñando, quizá marcadamente criolla, se nutrió de algunos nuevos elementos universales.

Así, los nuevos medios de comunicación multiplicaban su influencia sobre las formas de vida y sobre las actitudes y los valores de esta sociedad expansiva. También operaron sobre la sensibilidad deportiva, asociada desde principios de siglo con una actitud vitalista y con las concepciones higiénicas y el placer por el ejercicio y el aire libre, que desde la elite se habían ido difundiendo en la sociedad. La creación de clubes deportivos fue una de las formas características del impulso asociacionista general. Progresivamente, algunas de sus actividades se transformaron en espectáculos masivos, que los medios de comunicación proyectaban desde su ámbito local originario hacia todo el país. En 1931, se constituyó la Liga Profesional de Fútbol, y de la mano de la radio y la prensa escrita, los clubes de fútbol porteños agregaron un nuevo elemento

de identificación nacional, quizá tan fuerte como los símbolos patrios o la figura de Hipólito Yrigoyen. La tendencia a la homogeneización de la sociedad, en torno de una cultura compartida por sectores sociales diversos, se acompañó de un proceso igualmente significativo de diferenciación de funciones.

Una de sus manifestaciones fue la constitución de un mundo intelectual y artístico que, aunque estuvo impulsado por la creciente demanda cultural de la sociedad, definió una forma de funcionamiento que le era propia. Como ha puntualizado David Viñas, a diferencia de los *“gentlemen-escritores”* de fines de siglo, los artistas y los escritores se sintieron profesionales, y algunos lo fueron plenamente. Tuvieron sus propios ámbitos de reunión - cafés, redacciones, galerías y revistas- y sus propios criterios para consagrar el mérito o abominar de la mediocridad. Desde 1924 Buenos Aires tuvo una “vanguardia”, iconoclasta y combativa: ese año Pettoruti trajo el cubismo, Ernest Ansermet introdujo la música impresionista y se fundó la revista *Martín Fierro*, que en torno de la estética ultraísta núcleo a muchos de los nuevos escritores, ansiosos de criticar a los viejos. Otros muchos abrazaron la consigna del compromiso social y la utopía del comunismo, y entre ambos grupos -identificados con Florida y Boedo- se entabló una aguda polémica. Los puntos de coincidencia y los intercambios eran probablemente más que los de oposición, pero lo cierto es que los intelectuales empezaron a practicar por entonces un nuevo estilo de discusión, en el que la realidad local resultaba inseparable de la de Europa, Estados Unidos y la propia Unión Soviética, quizá más idealizada que conocida.

LA ECONOMÍA EN UN MUNDO TRIANGULAR

Con la Primera Guerra Mundial -mucho más que con la crisis de

1930- terminó una etapa de la economía argentina: la del crecimiento relativamente fácil, sobre rumbos claros. Desde 1914 se ingresa en un mundo más complejo, de manejo más delicado y en el que el futuro era relativamente incierto, al punto de predominar las dudas y el pesimismo, que sólo en algunos círculos se transformaba en desafío para la búsqueda de nuevas soluciones.

La guerra puso de manifiesto en forma aguda un viejo mal: la vulnerabilidad de la economía argentina, cuyos nervios motores eran las exportaciones, el ingreso de capitales, de mano de obra, y la expansión de la frontera agraria. La guerra afectó tanto las cantidades como los precios de las exportaciones, e inició una tendencia a la declinación de los términos del intercambio. Las exportaciones agrícolas sufrieron primero el problema de la falta de transportes, pero, acabado el conflicto, se planteó otro más grave y definitivo: el exceso de oferta en todo el mundo y la existencia de excedentes agrícolas permanentes, que impulsó a cada gobierno a proteger a sus agricultores. Más profunda fue la caída de las exportaciones ganaderas luego de 1921. Durante la guerra hubo repatriación de capitales, pero al finalizar ésta fue evidente que los tiempos del flujo fácil y automático habían terminado, pues los inversores de Gran Bretaña y los demás países europeos no estaban ya en condiciones de alimentarlo. Su lugar fue ocupado por los banqueros estadounidenses, como Morgan, que también estaban comprometidos con los préstamos a Europa, de modo que el flujo estuvo condicionado a la situación económica general. El país experimentó con violencia los efectos de la coyuntura europea: vivió una fuerte crisis entre 1913 y 1917, se recuperó entre ese año y 1921, especialmente porque regularizó su comercio de guerra, sufrió entre 1921 y 1924 el sacudón de la reconversión de posguerra, y conoció un período de tranquilidad durante los “años dorados”, hasta 1929, que sin embargo bastó para dar el tono general al período.

La principal novedad fue la fuerte presencia de Estados Unidos que, aquí como en otras partes del mundo, ocupó los espacios dejados libres por los países europeos, en mayor o menor medida derrotados en la guerra. La expansión económica de Estados Unidos en la década de 1920 se manifestó en primer lugar en un fuerte impulso exportador de automóviles, camiones y neumáticos -para los que la Argentina se convirtió en uno de sus principales clientes-, fonógrafos y radios, maquinaria agrícola y maquinaria industrial. Para asegurar su presencia en un mercado tentador, y saltar por sobre eventuales barreras arancelarias, las grandes empresas industriales -General Motors, General Electric, Colgate, entre otras- realizaron aquí inversiones significativas, que al principio se destinaron sólo a armar localmente las piezas importadas. También avanzaron sobre las empresas de servicios públicos -electricidad y tranvías- como propietarias y como proveedoras, en particular de los Ferrocarriles del Estado, los únicos que por entonces crecieron. A diferencia de las inversiones británicas, y salvo en el caso de la maquinaria agrícola, las estadounidenses no contribuían a generar exportaciones, y con ellas divisas. Como, por otra parte, las posibilidades de colocar nuestros productos tradicionales en Estados Unidos eran remotas -pese a algunas expectativas iniciales-, esta nueva relación creaba un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos, que se convirtió en un problema insoluble.

Por otro lado, la vieja relación “especial” con Gran Bretaña se sostenía sobre bases mínimas: las compras británicas de cereales y carne, que pagaban con los beneficios obtenidos por la venta de material ferroviario, carbón, textiles, y con las ganancias que daban los ferrocarriles y otras empresas de servicios. Sus insuficiencias eran cada vez más evidentes: los suministros eran caros, Gran Bretaña no podía satisfacer las nuevas demandas del consumo y el capital británico era incapaz de promover las transformaciones que

impulsaba el estadounidense. Pero, a la vez, la Argentina carecía de compradores alternativos, particularmente para la carne, sobre todo después de 1921. Hostilizados de modo creciente por los estadounidenses -que ya antes de la guerra los habían desplazado de los frigoríficos-, los británicos podían presionar sobre el gobierno argentino con volcar sus compras a los países del Commonwealth, una alternativa por otra parte reclamada por quienes querían introducir a Gran Bretaña en el nuevo mundo del proteccionismo.

En suma, como ha subrayado Arturo O'Connell, la Argentina era parte de un triángulo económico mundial, sin haber podido equilibrar las diferentes relaciones. Manejarse entre las dos potencias requería un arte del que el gobierno de Yrigoyen pareció escaso, mientras que el de Alvear fue, al respecto, más imaginativo y sutil, aunque tampoco encontró la solución a los problemas de fondo, que probablemente no la tenían. Pero además, se requería un arte especial para enfrentar las situaciones de crisis, cuando los conflictos entre las partes se exacerbaban y las pérdidas se descargaban en los actores más débiles: los productores locales, o quienes trabajaban para ellos. Desde 1912 se había conocido este tipo de tensiones en la agricultura; desde 1921 se manifestaron en un punto mucho más sensible y que afectaba a intereses más poderosos: la ganadería.

Gracias a las ventas de carne enlatada, los años finales de la guerra fueron excelentes, y beneficiaron no sólo a los ganaderos de la zona central, sino a los de las zonas marginales, y hasta a quienes criaban ganado criollo. La situación cambió bruscamente a fines de 1920, cuando los gobiernos europeos, que habían estado haciendo *stock*, cortaron sus compras, y los precios y volúmenes se derrumbaron. Las mayores pérdidas fueron sufridas por los ganaderos de las zonas más distantes, mientras que quienes poseían las tierras de invernada y suministraban el ganado fino para ser

enfriado -y para el que se conservó una cuota- lograron sortear en parte las dificultades. La crisis -que terminó de definir la diferenciación entre criadores e invernadores- desató conflictos que en épocas de bonanza se disimulaban, frente a los cuales el gobierno de Yrigoyen reaccionó tarde y mal. En 1923, por presión de los criadores y con el respaldo del presidente Alvear, el Congreso sancionó un conjunto de leyes que los protegían, en desmedro tanto de los consumidores locales como de los frigoríficos. La oposición de éstos y de sus voceros políticos -los socialistas- fue de escasa significación, pero la resistencia de los frigoríficos resultó demoledora: interrumpieron sus compras y en pocos meses obligaron al gobierno a suspender las leyes sancionadas.

El episodio probó el enorme poder de los frigoríficos, y de los grandes ganaderos directamente asociados con ellos, que resultó confirmado poco después. En los primeros años de la posguerra los ganaderos se ilusionaron con la posibilidad de colocar sus productos en Estados Unidos -lo que hubiera solucionado al menos en parte el problema de la balanza desfavorable-, pero a fines de 1926 el gobierno de aquel país, con el argumento del peligro de la fiebre aftosa, decidió prohibir cualquier importación de la Argentina. Gran Bretaña esgrimió una amenaza similar, logrando de los aterrorizados hacendados la aceptación de que la vuelta al bilateralismo era la única solución, para ellos y para el país. La Sociedad Rural invitó ahora a restringir en general la presencia estadounidense en la economía, y lanzó la consigna de “comprar a quien nos compra”, lo que implicaba defender las importaciones y las inversiones británicas y hacer pagar sus costos al conjunto de la sociedad.

Las cuestiones relacionadas con la agricultura despertaban menos preocupaciones, pese a que, como consecuencia de la crisis ganadera, hubo un notable vuelco hacia esa actividad. La frontera

agropecuaria pampeana se estabilizó en 50 millones de hectáreas; la agricultura creció en ella enormemente, así como su papel en las exportaciones. Se inició entonces un largo período de estabilidad, una suerte de meseta sin el crecimiento espectacular previo, pero también sin los problemas y el estancamiento posteriores a 1940. La expansión se proyectó en esos años hacia las zonas no pampeanas, en las que el gobierno, impulsado por el ministro Le Bretón, encaró una vigorosa empresa de colonización que absorbió los excedentes de población rural pampeana, así como nuevos contingentes migratorios. De esta manera, entraron en producción la zona frutícola del valle del Río Negro, la yerbatera de Misiones y, sobre todo, la región algodonera del corazón del Chaco, que habría de tener importancia decisiva en el futuro crecimiento de la industria textil.

Los observadores no se engañaban acerca de esta calma, pues para todos estaban visibles los límites que suponía tanto un mercado mundial cada vez más difícil como el fin de las ventajas comparativas naturales, por el cierre de la frontera agropecuaria y el encarecimiento de la tierra. A eso se sumaba la escasez de inversiones, salvo en la mecanización de la cosecha, que solucionó el problema de la reducción en la mano de obra disponible, sobre todo por la desaparición progresiva de los migrantes “golondrinas”. La pauta de conducta que hacía preferible mantener la liquidez del capital y oscilar entre distintas posibilidades de inversión, acuñada en la etapa anterior y amplificada por la diversificación de la economía -que hasta entonces había impulsado eficazmente el crecimiento-, dejó de cumplir esa función en las nuevas condiciones del mercado mundial. Tulio Halperin Donghi señaló esa conciencia incipiente de los males y, a la vez, la escasa propensión a hacer algo para enfrentarlos de parte de una sociedad que, en cambio, empezaba a interesarse en la cuestión industrial.

La guerra había tenido efectos fuertemente negativos sobre la industria que se había constituido en la época de la gran expansión agropecuaria: dependiente en buena medida de materias primas o combustibles importados, no pudo aprovechar las condiciones naturales de protección creadas por el conflicto. Pero apenas éste concluyó, comenzó una sostenida expansión, que se prolongó hasta 1930, caracterizada por la diversificación de la producción, que alcanzó así a nuevas zonas del consumo. Los contemporáneos atribuyeron en buena medida estos cambios a la elevación de los aforos aduaneros, establecida por Alvear en 1923, pero probablemente fueron las ya citadas inversiones estadounidenses el principal factor de esa expansión, que alentó también a inversores locales. Entre otros casos similares, Bunge y Born, la principal casa exportadora de granos, instaló por esos años la fábrica de pinturas Alba, y en la década siguiente, la textil Grafa. En buena medida, las nuevas industrias se equiparon con maquinaria estadounidense. Mientras Estados Unidos trataba de conquistar simultáneamente un mercado apetecible y parte de las divisas generadas por las exportaciones a Gran Bretaña, los sectores propietarios locales comenzaron a deslizarse hacia una actividad que parecía más dinámica que las tradicionales. Por entonces, el tema de la industria empezó a instalarse en el debate, y constituyó el eje del discurso del más lúcido buceador de la economía argentina de entonces, Alejandro Bunge, inspirador de la reforma arancelaria de Alvear. Es posible, como ha planteado Javier Villanueva, que en escala limitada tal reforma apuntara a alentar -mediante alguna traba al comercio- las inversiones estadounidenses, sin aumentar los conflictos con Gran Bretaña, preocupada tanto por el destino de las divisas como por la creciente competencia en algunos rubros de su antiguo negocio, y particularmente los textiles. De este modo, la incipiente corriente industrialista agregó un nuevo elemento al debate central

sobre las relaciones entre nuestro país y sus dos metrópolis, y, de momento al menos, quienes vislumbraban en el crecimiento industrial el camino del futuro carecieron de peso para imponer sus convicciones. La propia Unión Industrial se sumó al grupo de los partidarios de “comprar a quien nos compra”, una fórmula que, por otra parte, había sido acuñada por el embajador británico.

Ni la cuestión agraria ni la industrial estaban en el centro de la preocupación de los gobernantes, mucho más angustiados por los problemas presupuestarios. La guerra había puesto en evidencia la precariedad del financiamiento del Estado, apoyado básicamente en los ingresos de Aduana y en los impuestos indirectos, y respaldado por los sucesivos préstamos externos. Todo ello se redujo fuertemente en los dos períodos de crisis, y coincidió con el advenimiento de la administración radical, que por diferentes motivos debía encarar gastos crecientes. El gobierno de Yrigoyen necesitó primero recursos para su política social y luego para la amplia distribución de empleos públicos, que constituyó su principal arma política en los últimos años. Desde 1922, Alvear empezó con una política fiscal ortodoxa y redujo fuertemente los gastos hasta que, por necesidades de la lucha interna con el yrigoyenismo, debió apelar -aunque con más moderación- a la misma distribución de puestos que su antecesor, quien cuando volvió al poder, en 1928, hizo uso generoso de ese recurso. En ambos casos, los gastos del Estado aumentaron respecto de épocas anteriores, pero sobre todo su composición difirió sustancialmente, reduciéndose la parte de inversiones en beneficio de los gastos de administración, donde los empleados públicos tenían un peso fuerte.

En cualquier caso, era claro que el Estado debía buscar otra forma de financiar sus gastos. Inspirándose en reformas similares emprendidas en Francia e Inglaterra, Yrigoyen propuso en 1918 un

impuesto a los ingresos personales. El Congreso prácticamente no lo trató entonces, ni en 1924, cuando Alvear insistió en la idea. En cambio, hubo un amplio debate en aquellos círculos donde se estaban discutiendo las cuestiones del futuro y Alejandro Bunge, entusiasta sostenedor de la idea, le consagró un amplio espacio en la *Revista de Economía Argentina*. Se trató de una discusión elevada y principista, donde se analizaban las cuestiones de libertad, equidad y justicia social que por entonces se debatían en Europa. Es posible que allí se generara el consenso que luego llevó a su rápida aprobación en 1931, luego ya de la crisis y de la caída de Yrigoyen. Pero por entonces las razones del bloqueo parlamentario fueron más pedestres: los opositores se negaban a cualquier legislación que diera al presidente más recursos que, según suponían, se volcarían en menesteres electorales.

DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA

El frustrado debate fiscal ejemplifica las dificultades para constituir un sistema democrático eficiente, en el que las propuestas pudieran discutirse racionalmente y donde los distintos poderes se contrapesaran en forma adecuada. La reforma electoral de 1912 proponía a la vez ampliar la ciudadanía, garantizar su expresión y asegurar el respeto de las minorías y el control de la gestión. En ninguno de estos aspectos los resultados fueron automáticos, o siquiera satisfactorios. Respecto de la participación electoral, la masa de inmigrantes siguió sin nacionalizarse, de modo que los varones adultos que no votaban eran tantos o más que los que podían hacerlo; esta cuestión sólo se resolvió de manera natural, con el tiempo y el fin de la inmigración. Pero incluso entre los posibles votantes la participación no fue masiva: en 1912 -quizá por efecto de la novedad- alcanzó el 68% en todo el país, pero en

seguida cayó a algo más del 50%, tocando fondo en 1924, con el 40%; sólo en 1928 -con la elección plebiscitada de Yrigoyen- repuntó espectacularmente, con valores que desde entonces se mantuvieron, en torno al 80 por ciento.

Concedida, antes que conseguida, la ciudadanía se constituyó lentamente en la sociedad. Las múltiples y diversas asociaciones de fines específicos que la cubrieron -desde las fomentistas urbanas hasta las cooperativas rurales- contribuyeron a la gestación de experiencias primarias de participación directa y al desarrollo de las habilidades que, por otra parte, la política requería: hablar y escuchar, convencer, ser convencido y, sobre todo, acordar. También contribuyeron a otra experiencia importante: la gestión ante las autoridades, la mediación entre las demandas de la sociedad y el poder político. Funciones similares cumplieron los comités o centros creados por los partidos políticos, que fueron cubriendo densamente a la sociedad a medida que la práctica electoral se convertía en rutina. En buena medida funcionaban al viejo estilo: un caudillo repartía favores -tanto mayores cuanto más directa fuera su conexión con las autoridades- y esperaba así poder influir en el voto de los beneficiados. Los radicales, naturalmente, pudieron expandir, gracias al apoyo oficial, esta red clientelar que de todos modos ya habían constituido en el llano. El propio gobierno utilizó los comités para desarrollar algunas políticas sociales masivas, que aunque tenían claras finalidades electorales apuntaban a una nueva concepción de los derechos ciudadanos: la carne barata, o carne “radical”, y también el pan o los alquileres. En cierto modo -sobre todo entre los socialistas-, apuntaban a la educación y a la integración del ciudadano y su familia en una red de sociabilidad integral: capacitación, entretenimiento, cultura... Pero en todos los casos contribuyeron a desarrollar las capacidades políticas. En ese ambiente se formó el nuevo ciudadano, educado y consciente de sus

derechos y de sus obligaciones, y de manera progresiva se fue revelando la dimensión política de todas las actividades, de modo que gradualmente la brecha entre la sociedad y el Estado se fue cerrando.

El crecimiento de los partidos da la medida del arraigo de la nueva democracia. La Unión Cívica Radical fue el único que alcanzó la dimensión del moderno partido nacional y de masas. Templado en una larga oposición, y constituido para enfrentarse al régimen, pudo funcionar eficazmente aun lejos del poder. Basado en una extensa red de comités locales, se organizó escalonadamente hasta llegar a su Convención y su Comité Nacional; una carta orgánica fundamentaba su organización, y su doctrina era, ni más ni menos, la de la Constitución, como gustaba de subrayar Yrigoyen. Pero además el partido demostró una preocupación muy moderna por adecuar sus ofertas a las cambiantes demandas de la gente. Quizá la expresión más acabada de su modernidad fue su capacidad para suministrar una identidad política nacional, la primera y la más arraigada, en un país cuyos signos identificadores comunes eran todavía escasos. Pero esa modernidad se asentaba en elementos muy tradicionales: toda la compleja organización institucional pesaba poco frente al liderazgo de Yrigoyen, y en la identificación de sus seguidores, el partido se fundía con su figura. Caudillo silencioso y recatado, que se mostraba poco y que jamás hablaba en público, empezó luego a estimular una suerte de culto a su persona: el país se llenó de sus retratos, de medallones, de mates con su imagen, en los que la gente identificó al presidente con un apóstol o un mesías.

El Partido Socialista también tenía una organización formal y cuerpos orgánicos, y además tenía un programa, pero carecía de dimensión nacional, pues aunque logró algún arraigo en Mendoza, Tucumán o Buenos Aires, casi toda su fuerza estaba concentrada en la Capital. Allí, gracias a la penetración de su red de centros, y a su

éxito en ofrecer una alternativa de control al gobierno, compitió palmo a palmo con el radicalismo y lo venció a menudo. El Partido Demócrata Progresista, por su parte, arraigó entre los chacareros del sur de Santa Fe y de Córdoba, así como en la ciudad de Rosario; junto con los temas agrarios desarrolló los de la limpieza electoral, y tuvo un cierto peso en la Capital. Los partidos de derecha sólo se constituyeron en el nivel provincial; aunque el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires ejerció un liderazgo reconocido, y pudieron ponerse de acuerdo para las elecciones presidenciales, no se llegó a estructurar una fuerza nacional estable, quizá porque tradicionalmente esto se había logrado a través de la autoridad presidencial.

En las elecciones nacionales, la UCR obtuvo algo menos de la mitad de los votos, aunque en 1928, cuando Yrigoyen fue plebiscitado, se acercó al 60%. Los conservadores reunidos obtuvieron entre el 15 y el 20% y los socialistas entre el 5 y el 10%, con excepción de 1924 -el año de la mayor abstención- en que ascendieron al 14%. Los demócratas progresistas tuvieron una evolución similar, aunque con cifras algo menores. Así, la UCR fue en realidad el único partido nacional, y sólo enfrentó oposiciones, fuertes pero locales, en cada una de las provincias, incluyendo grupos escindidos de su tronco, como el bloquismo sanjuanino o el lencinismo mendocino.

La participación, finalmente, arraigó y se canalizó a través de los partidos, como lo testimonian las cifras de 1928 y la intensa politización previa de toda la sociedad, que al fin estaba haciendo uso de la democracia. Pero, en cambio, el delicado mecanismo institucional, que también es propio de las democracias, no llegó a constituirse plenamente, y la responsabilidad les cupo a todos los actores.

La reforma electoral preveía un papel importante para las

minorías, de control del Ejecutivo desde el Congreso. Esa relación, que de algún modo podía remitirse a las prácticas institucionales anteriores, se mezclaba con otra nueva, que debía aprenderse, entre el presidente y la oposición. Si bien las relaciones del gobierno con los sectores tradicionales no fueron malas al comienzo -cinco de los nuevos ministros eran socios de la Sociedad Rural-, las que mantuvo con la oposición política fueron desde el principio difíciles. Yrigoyen comenzó su gobierno con un Parlamento hostil, al igual que la mayoría de los gobiernos provinciales, y buena parte de su estrategia se dirigió a aumentar su escueto poder. Para ganar las elecciones, usó ampliamente el presupuesto del Estado, repartiendo empleos públicos entre sus “punteros”, aunque en Buenos Aires la competencia con los socialistas lo llevó a emplear métodos más modernos. En 1918 logró obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, pero la clave seguía pasando por el control de los gobiernos provinciales, decisivos a la hora de votar. No vaciló en intervenir las provincias desafectas, organizando luego elecciones en las que triunfaban sus candidatos, y así su poder aumentó considerablemente, aunque nunca logró afirmarse en el Senado, y tropezó con dificultades imprevistas en Diputados, donde los legisladores opositores empezaron a encontrar aliados en muchos radicales que no aceptaban los métodos del presidente.

Yrigoyen planteó un conflicto con el Congreso desde el primer día de su mandato, cuando descartó la tradicional ceremonia de la lectura del mensaje, y envió una breve comunicación, que leyó un secretario. Simbólicamente, desvalorizaba al Congreso y desconocía su autoridad, del mismo modo en que lo hizo todas las veces que aquél, por la vía de la interpelación, intentó controlar sus actos: el presidente y sus ministros no sólo no asistieron, sino que le negaron injerencia en los actos del Ejecutivo. Este cortocircuito institucional fue más evidente aún con las intervenciones federales. Durante los

seis años, se sancionaron 19, y sólo Santa Fe nunca fue intervenida. Sólo en cuatro ocasiones se solicitó una ley parlamentaria para intervenir provincias administradas por radicales, en las que había que terciar en conflictos internos. En 15 ocasiones se hizo por decreto, ignorando al Congreso, para eliminar gobiernos adversos y “dar vuelta” situaciones provinciales. El método, en nada diferente al de Juárez Celman o Figueroa Alcorta, fue exitoso: en 1922 el oficialismo sólo perdió en dos provincias.

Si Yrigoyen reiteraba prácticas muy arraigadas, que otros retomarían luego, su justificación era novedosa: el presidente debía cumplir un mandato y una misión, la “reparación”, para la que había sido plebiscitado, y eso lo colocaba por encima de los mecanismos institucionales. Quizá por eso el “apóstol” empezó a ser deificado por sus seguidores. Más allá del contenido de esa reparación, lo cierto es que los mecanismos democráticos difícilmente pudieron arraigar en ese clima de permanente avasallamiento autoritario.

Es curioso que quienes se convirtieron en custodios de la pureza institucional fueran aquellos que, en otras ocasiones antes y después, manifestaron escaso aprecio por dichos mecanismos. Lo cierto es que tanto conservadores como radicales disidentes - encabezados por el hábil Vicente Gallo- se hicieron fuertes en la defensa del orden institucional, y lo hicieron enconadamente, junto con socialistas y demoprogresistas, y hasta salieron a la calle, en el agitado año 1918, para reclamar por sus fueros. De ese modo, mientras el radicalismo y su caudillo hacían una contribución sustancial a la incorporación ciudadana a la vida política -en un estilo tradicional y moderno a la vez-, fallaban no sólo en el afianzamiento, sino en la puesta en valor ante la ciudadanía del sistema institucional democrático.

Como Sáenz Peña, Alvear se benefició de la máquina montada,

que en 1922 lo eligió canónicamente y con escasa oposición. Es posible que su elección por Yrigoyen apuntara a limar asperezas con unos sectores opositores cuya gravitación reconocía. Pero Alvear avanzó mucho más en ese camino. En su gabinete sólo se sentó un yrigoyenista, el ministro de Obras Públicas. Limitó la creación de nuevos empleos públicos y aceptó las funciones de control que institucionalmente le correspondían al Parlamento, cuyas relaciones cultivó con cuidado. Sobre todo, no dispuso intervenciones federales por decreto. El aparato partidario reaccionó en primer término, pues la distribución de pequeños empleos públicos era la principal herramienta de los caudillos locales: el “popular” Yrigoyen fue contrapuesto al “oligárquico” Alvear. Pero además Alvear se fue apoyando en quienes en distintas ocasiones se habían opuesto a Yrigoyen o habían cuestionado sus métodos, y los seguidores del viejo caudillo pronto formaron una corriente cada vez más hostil al gobierno. A fines de 1923, Alvear pareció inclinarse decididamente por el grupo opositor, al nombrar ministro del Interior a Vicente Gallo, quien junto con Leopoldo Meló encabezaba la corriente denominada antipersonalista. La división del radicalismo se profundizó: en 1924, presentaron listas separadas, y pronto constituyeron dos partidos diferentes. La disputa verbal fue muy intensa: unos eran “genuflexos”, por su obediencia incondicional al jefe, y otros, “contubernistas”, según una nueva y afortunada palabra, que calificaba los acuerdos entre los antipersonalistas, conservadores y socialistas. El ministro Gallo quiso recurrir a los viejos y probados métodos para desplazar a los yrigoyenistas: dar empleos a los partidarios e intervenir gobiernos provinciales adversos, pero Alvear no quiso abandonar hasta tal punto sus principios. En julio de 1925, fracasó en el Congreso un proyecto de intervención a Buenos Aires, que era clave para la estrategia de Gallo, y éste renunció al ministerio.

Desde entonces Alvear quedó en el medio del fuego cruzado entre antipersonalistas -que sólo pudieron arraigar firmemente en Santa Fe- y los yrigoyenistas, que hicieron una elección muy buena en 1926 y ganaron posiciones en un Congreso convertido en ámbito de combate de las dos facciones. La polarización fue extrema, y al grupo antiyrigoyenista se sumaron sectores provinciales disidentes, como el lencinismo mendocino o el cantonismo sanjuanino, de fuerte estilo populista, sólo unidos con sus socios por el odio al jefe radical.

La derecha conservadora estaba por entonces totalmente volcada a impedir el retorno de Yrigoyen, en quien veía encarnados los peores vicios de la democracia: ya lo presentaban como el agitador social, ya como el caudillo autoritario, ya simplemente como la expresión de la chusma tosca e incompetente. Tal imagen era expuesta, con diversos matices, por *La Nación* o *La Prensa* y, para un público más popular, por *Crítica*, convertida en centro de la campaña antiyrigoyenista. De momento, su oposición no suponía un cuestionamiento del régimen político, pues estaban decididos a jugar la carta electoral, reuniendo en un gran frente a toda fuerza hostil al caudillo, que incluía al grupo de socialistas que, encabezado por Antonio de Tomaso y Federico Pinedo, acababa de separarse del viejo partido para formar el Partido Socialista Independiente.

A diferencia de 1916, la derecha política estaba segura de sus objetivos y del apoyo que tenía entre las clases propietarias, pero empezaba a manifestarse una ambigüedad acerca de los medios: si la carta electoral fallaba -empezaba a pensarse-, habría que jugar otra que, de una u otra manera, terminara con un régimen democrático que no aseguraba la elección de los mejores. En favor de esa postura actuaban distintos grupos políticos e ideológicos que, aunque minoritarios, habían contribuido a la nueva galvanización de la derecha. Desde *La Nueva República*, fundada en 1927, los jóvenes

maurrasianos, como los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta o Ernesto Palacio, descargaban sus baterías contra el sufragio universal y la democracia oscura, que debía ser reemplazada por la segura dirección de un jefe, rodeado de una elite y legitimado plebiscitariamente. Pronto, la Liga Republicana que formaron salió a la calle, aun cuando quedó claro que eran incapaces de revivir las movilizaciones de 1919. Una “marcha sobre Roma” era impensable, de modo que los ojos se volvieron hacia las Fuerzas Armadas, a las que Leopoldo Lugones ya había apelado en 1924, en unas conferencias que el Ejército editó para consumo de sus oficiales, y que *La Nación* ya había difundido en aquella ocasión. La adhesión manifiesta del general José Félix Uriburu, que acababa de pasar a retiro, permitía sin duda alentar esperanzas de un golpe militar regenerador, y ésa era la oferta que desde los grupos nacionalistas se hacía a una elite todavía indecisa entre la vieja república liberal y las promesas de la nueva república nacionalista.

Las expectativas de los nacionalistas con las Fuerzas Armadas eran exageradas, máxime cuando no había una crisis social que justificara, como en 1919, la revisión de los principios institucionales en los que habían sido sólidamente educadas. Si las Fuerzas Armadas experimentaron malestares varios durante el gobierno de Yrigoyen, todo se solucionó en el período siguiente. Bajo la conducción del general Justo, ministro de Guerra, se habían reequipado adecuadamente, y grandes edificios junto con grandes maniobras le habían dado al Ejército una buena visibilidad social. El presidente Alvear se mostraba sensible a los planteos del grupo de los ingenieros militares, preocupados desde la Primera Guerra Mundial por la cuestión de las “dependencias críticas”. En 1927, se creó la Fábrica Militar de Aviones, y desde 1922 un militar, Enrique Mosconi, presidía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creado por Yrigoyen cuando su período ya expiraba. Bajo la dirección de

Mosconi -que al igual que Justo era ingeniero militar- la empresa se expandió en la explotación y, gracias a la construcción de su refinería en La Plata, avanzó en el mercado interno, poblando el país con sus característicos surtidores. Pero simultáneamente, y al calor de la expansión del automóvil, también crecieron las grandes empresas privadas: la británica Shell y la estadounidense Standard Oil, que actuaba en Salta, de modo que la competencia empezó a convertir el petróleo en un tema de discusión pública.

Las Fuerzas Armadas, y particularmente el Ejército, estaban ocupando un lugar cada vez más importante en el Estado, y en la medida en que definían intereses propios, se convertían en un actor político de consideración. También ellas estaban asediadas por propuestas diversas: la relación de sus oficiales con la derecha liberal tradicional era estrecha, así como era sólido el profesionalismo inculcado por el general Justo, pero también eran estrechas sus vinculaciones con la Liga Patriótica, y fuerte la interpelación que llegaba desde los nuevos ideólogos nacionalistas. La vuelta al gobierno de Yrigoyen reactualizó viejos resquemores -por su tendencia a manejar los ascensos con los criterios del comité- y sin duda polarizó a los oficiales, como al país todo. Pero significativamente, en las elecciones del Círculo Militar de 1929 se impuso la lista del general Mosconi, contra otra simpatizante con la oposición. Quien se perfilaba como la cabeza natural de ella, el general Uriburu, dirigía sus acciones desde el Jockey Club, y en realidad carecía de sólido arraigo en un Ejército cuya conducta era todavía un enigma.

LA VUELTA DE YRIGOYEN

Desde 1926 la opinión se polarizó en torno de la vuelta de Yrigoyen, y la discusión se propagó a todos los ámbitos de la sociedad. El

yrigoyenismo, impulsado por una camada de nuevos dirigentes, desarrolló ampliamente su red de comités y fortaleció la imagen mítica del caudillo. Aunque tradicionalmente Yrigoyen se había negado a identificar su “causa regeneradora” con cualquier programa definido de manera explícita, en esta ocasión utilizó, junto con la consigna de derrotar al “contubernio”, la bandera de la nacionalización del petróleo. Se trataba de una situación curiosa, pues durante su primera presidencia el tema no le había preocupado mucho, mientras que los mayores avances en esa línea debían atribuirse, sin duda, a la administración de Alvear. Pero -como empezaba a descubrirse- en la democracia de masas las consignas son eficaces por la cantidad de motivos ideológicos que logran reunir. En los años anteriores, el problema petrolero se había instalado en la discusión pública, y la presencia extranjera era asociada con su manifestación más agresiva: la estadounidense de la Standard Oil. La bandera de la nacionalización coincidía con la prédica de los sectores militares preocupados por asegurar la autarquía del país respecto de los recursos estratégicos, se vinculaba con la nueva y fuerte hostilidad de los sectores terratenientes hacia Estados Unidos, a partir del conflicto de las carnes, y enraizaba finalmente en un sentimiento antiestadounidense de más larga data, que asociaba unívocamente la metrópoli del norte con el “imperialismo”. Pero sobre todo, da la impresión de que de alguna manera el petróleo aparecía como la panacea que aseguraría la vuelta a la prosperidad, una fuente de rentas tan abundante que con ellas podría asegurarse a la vez el bienestar de los sectores propietarios, del Estado y de la sociedad que, de un modo u otro, obtenía sus recursos de ambos. Es difícil saber cuánto influyó esta bandera -ciertamente moderna- en la campaña y cuánto una adhesión mucho más personal al viejo caudillo. Lo cierto es que su victoria de 1928 fue triplemente notable: por la cantidad de gente

que participó, por los votos que recibió Yrigoyen, que rondaron el 60%, y por haber sido obtenida casi desde el llano, sin la bendición presidencial.

El proyecto de nacionalización, aprobado por la Cámara de Diputados, se detuvo en el Senado, y hasta tanto lograra resolver la cuestión, Yrigoyen se dedicó a otra que afectaba más directamente sus relaciones con los sectores propietarios. Invitada por el presidente, vino al país una misión comercial británica, encabezada por lord D'Abernon. El acuerdo firmado estableció fuertes concesiones comerciales a los británicos, asegurándoles el suministro de materiales a los ferrocarriles del Estado, así como un arancel preferencial a la seda artificial, a cambio de la garantía de que seguirían comprando la carne argentina. Este tratado, que suponía importantes concesiones sin un beneficio claro, muestra a Yrigoyen solidarizado con la corriente, fuerte entre la elite, de robustecer las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, en desmedro de las nuevas con Estados Unidos.

Pero esta coincidencia no bastaba frente a la exacerbación del conflicto político. Lanzado a conquistar el último baluarte independiente -el Senado-, el gobierno apeló a los clásicos mecanismos: amplio reparto de puestos públicos -con lo cual saldaba su deuda con el aparato partidario, fiel durante los años de abstinencia- e intervención a gobiernos provinciales adversos: esta vez le tocó a Santa Fe, baluarte antipersonalista, a Corrientes, y sobre todo a Mendoza y a San Juan, donde se desató un largo conflicto institucional acerca de la aprobación de los diplomas de los senadores ya electos. En esas provincias, donde ya se habían registrado episodios de violencia, se agregó uno nuevo: el asesinato de Carlos Washington Lencinas, el caudillo mendocino, en un acto en el que la intervención federal apareció comprometida.

Es probable que la oposición, abrumada por los resultados

electorales, ya hubiera desesperado de desalojar a Yrigoyen por métodos institucionales, y no apreciara en su real significación las consecuencias inmediatas de la crisis económica mundial, estallada en octubre de 1929. La caída de las exportaciones y el retiro de los fondos estadounidenses afectaron a las empresas ferroviarias y marítimas, vinculadas con el comercio exterior, y también al gobierno. La fuerte inflación, las reducciones de sueldos y los despidos se reflejaron inmediatamente en los resultados electorales: en marzo de 1930, y con el apoyo de la oposición toda, los socialistas independientes derrotaron en la Capital tanto a los radicales como a los socialistas, y en otros puntos el gobierno también retrocedió. Sin embargo, a esa altura todas las voces de la oposición, desde *Crítica* a la Liga Republicana o los estudiantes universitarios reformistas, clamaban por la caída del gobierno. La senilidad atribuida al presidente y su incapacidad para dar respuestas rápidas a la crisis, así como la pública lucha por su sucesión -entre el vicepresidente Enrique Martínez y el ministro de Interior, Elpidio González-, daban un nuevo y contundente argumento a los opositores.

Las discusiones giraban acerca de si se buscaría una solución institucional o si se apelaría a una intervención militar; si con el nuevo gobierno se intentaría una reinstitucionalización según los moldes tradicionales o si había llegado la ocasión de la nueva república, inspirada en alguno de los modelos que por entonces ofrecía Europa. Probablemente la elite oscilara entre ambas soluciones, una alentada por los dirigentes políticos y por el grupo de militares que seguía al general Justo y otra por los ideólogos nacionalistas que rodeaban al general Uriburu. Sólo cuando ambos jefes se pusieron de acuerdo, pudo producirse el golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930. La resistencia de las instituciones fue casi nula -el día anterior, Yrigoyen había pedido licencia en su cargo-, pero también las fuerzas movilizadas por los sublevados fueron

escasas, y su grueso estaba constituido por los bisoños cadetes del Colegio Militar. Igualmente escasa fue la movilización a favor del presidente caído, que poco antes casi había sido plebiscitado.

La indiferencia con que fue acogido el fin de una experiencia institucional sin duda importante obliga a una reflexión acerca de su consistencia. En buena medida, el proceso de democratización completó la larga etapa de apertura y expansión de la sociedad iniciada cinco décadas atrás y aparecía como su coronación natural: la incorporación creciente de sectores sociales cada vez más vastos a los beneficios de la sociedad establecida que más allá de la crisis de 1917-1921 caracteriza a este período supuso finalmente una ampliación de la ciudadanía, inducida al principio desde el Estado pero finalmente asumida por la sociedad, como lo testimonia el espectacular aumento de la participación hacia el final del período.

Pero a la vez era necesario traducir institucionalmente ese proceso, poner en marcha las prácticas requeridas y arraigarlas de tal modo que su ejercicio resultara natural, y aquí los gobiernos radicales no lograron avanzar lo suficiente como para que esas instituciones aparecieran para la sociedad como un valor que debía ser defendido. Podría decirse que el radicalismo no logró desprenderse de las prácticas corrientes en el viejo régimen -aquéllas estigmatizadas con una expresión muy gráfica: el unicato- y subordinó el desarrollo de las nuevas prácticas a las exigencias de la antigua costumbre. Por su parte, una oposición a menudo facciosa hizo poco por hacer semejar la enconada lucha política a un diálogo constructivo entre gobierno y oposición, e hizo mucho menos por defender a ultranza unas instituciones de las que las clases propietarias desconfiaron desde el principio.

El balance no estaría completo si no se agregara que democracia y radicalismo advinieron en el preciso momento en que las circunstancias propicias para su florecimiento cambiaban en forma

brusca, por más que la sociedad tardara en percatarse de ello. La Primera Guerra Mundial modificó sustancialmente los datos del funcionamiento de nuestra economía, puso en cuestión el lugar que el país ocupaba en el mundo y desató una serie de conflictos internos, que en ocasiones se manifestaron con violencia. Quien gobernara el país no podía conformarse con las antiguas fórmulas y debía inventar respuestas imaginativas. Si además pretendía gobernarlo democráticamente, tenía que encontrar las formas institucionales de resolución de los conflictos, ampliando los espacios de representación y de discusión, así como los mecanismos estatales de regulación, y en ambos aspectos el déficit de las administraciones radicales fue grande. Estas cuestiones, tanto o más que las vinculadas con la democracia institucional, dominaron el período siguiente.